

PRONUNCIAMIENTO N° 330-2023/OSCE-DGR

Entidad : Superintendencia Nacional de Migraciones

Referencia : Concurso Público N° 8-2023-MIGRACIONES-1, convocado para la contratación del “Servicio de seguridad y vigilancia para las sedes de migraciones de Lima y Callao”

1. ANTECEDENTES:

Mediante el Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 20 de julio de 2023¹ y subsanado el 1² de agosto de 2023, el presidente del comité de selección a cargo del procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas u observaciones y Bases integradas presentada por la empresa participante **PROTECCION Y RESGUARDO S.A.**, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la “Ley”, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el “Reglamento”; y sus modificatorias.

Adicionalmente, cabe indicar que en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la información remitida por la Entidad con fecha 15³ y 16⁴ de agosto de 2023, mediante la Mesa de Partes de este Organismo Técnico Especializado, las cuales tienen carácter de declaración jurada.

Asimismo, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio⁵ y los temas materia de cuestionamientos del mencionado participante, conforme el siguiente detalle:

- **Cuestionamiento N° 1:** Respecto a la absolución de las consultas y observaciones N° 6 y N° 12, referidas a los “Radios de comunicación troncalizada portátiles”

- **Cuestionamiento N° 2:** Respecto a la absolución de la consulta y observación N° 46, referida al “uso correcto del vehículo”

¹ Mediante Trámite Documentario N° 2023-24780497-LIMA.

² Mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA.

³ Mediante Trámite Documentario N° 2023-25002706-LIMA.

⁴ Mediante Trámite Documentario N° 2023-25006275-LIMA.

⁵ Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF.

- **Cuestionamiento N° 3:** Respecto a la absolución de las consultas y observaciones N° 16, N° 18 y N° 27, referida a la “tarjeta de propiedad de las armas”
- **Cuestionamiento N° 4:** Respecto a la absolución de las consultas y observaciones N° 19 y N° 20, referidas a la “experiencia del postor en la especialidad”
- **Cuestionamiento N° 5:** Respecto a la absolución de la consulta y observación N° 30, referida a la “renovación de prendas de vestir”
- **Cuestionamiento N° 6:** Respecto a la absolución de las consultas y observaciones N° 42 y N° 72, referidas al “certificado de examen médico ocupacional requerido para el personal”
- **Cuestionamiento N° 7:** Respecto a la absolución de las consultas y observaciones N° 44 y N° 45, referidas a la “experiencia requerida para el personal de seguridad y vigilancia”
- **Cuestionamiento N° 8:** Respecto a la absolución de la consulta y observación N° 48, referida al “Perfil del personal clave”

Por otro lado, de la revisión de la solicitud de elevación de cuestionamientos a la absolución de consultas y observaciones e integración de Bases, formulada por el participante PROTECCION Y RESGUARDO S.A., se aprecia que, al cuestionar las consultas y observaciones N° 44 y N° 45, señaló lo siguiente:

Consulta u observación N° 44:

“(…)
*Por todo lo expuesto elevamos la presente absolución a fin que se responda de manera clara y conforme a la Legislación Laboral vigente, **el contenido de los certificados de trabajo que acreditarán la experiencia de los vigilantes** ya que existen empresas que fabrican o mandan hacer de favor a otras empresas sus constancias de trabajo sin un respaldo de planilla y/o registro SUCAMEC.
 (…)*”.

Consulta u observación N° 45:

“(…)
*De lo expuesto, **consultamos si ante esta situación real y común en las experiencias de vigilantes provenientes de empresas de seguridad, las empresas empleadoras actuales puedan hacer un documento adicional como una Declaración Jurada donde mencionen que únicamente acreditan como experiencia válida el tiempo que el vigilante laboro en la planilla de su empleador contando con su carnet SUCAMEC.***

(...)”.

Al respecto, cabe señalar que, respecto a la consulta u observación N° 44, dicha petición no fue abordada en la referida consulta y/u observación, toda vez que, esta estuvo referida a “confirmar si la experiencia del personal ofertado, de firma de contrato y de ejecución debería ser emitida únicamente por el empleador del vigilante y según el tiempo que se respalda con su T-REGISTRO SUNAT”, más no requerir el contenido de los certificados de trabajo que acreditaran la experiencia de los vigilantes; por lo que, al tratarse de una pretensión adicional que debió ser presentada en la etapa pertinente, deviene en extemporánea; razón por la cual, este Organismo Técnico Especializado no se pronunciará al respecto.

Por otra parte, respecto a la consulta u observación N° 45, dicha petición no fue abordada en la referida consulta y/u observación, toda vez que, esta estuvo referida a “definir los parámetros que deberán cumplir la constancia o certificado mediante el cual la empresa acreditará la experiencia de sus trabajadores”, más no requerir una Declaración Jurada donde mencionen que únicamente acreditan como experiencia válida el tiempo que el vigilante laboro en la planilla de su empleador contando con su carnet SUCAMEC; por lo que, al tratarse de una pretensión adicional que debió ser presentada en la etapa pertinente, deviene en extemporánea; razón por la cual, este Organismo Técnico Especializado no se pronunciará al respecto.

2. CUESTIONAMIENTOS

Cuestionamiento N° 1

Respecto a los “Radios de comunicación troncalizada portátiles”

La empresa participante PROTECCION Y RESGUARDO S.A, cuestionó la absolución de las consultas y observaciones N° 6 y N° 12, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamientos lo siguiente:

“(…)”

ALTERACION DE REQUERIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACION DE LAS RADIOS AL CAMBIAR EL SISTEMA DE COMUNICACION TETRA POR UNOS CONVENCIONALES DEL SISTEMA VHF

En la consulta 6 realizada por la empresa PREVENCION Y VIGILANCIA S.A., solicitan suprimir el requerimiento de radios troncalizados con soporte a red móvil TETRA, según ellos por no ser necesario para el servicio, sin considerar que las únicas radios que permiten comunicación entre todos los locales de MIGRACIONES detallados en el cuadro del servicio pagina 45 de los TDR, establecen que las radios deberán enlazar las diferentes sedes de MIGRACIONES como son: Sede Central, Sede Huaraz, Sede Colonial, Sede Callao y Sede Breña, lo cual no sería posible con radios convencionales de corto alcance, salvo dichos sistemas cuenten con sistema de antenas repetidoras que no están siendo requeridas en los TDR.

La extraña alteración a los TDR, va en perjuicio de MIGRACIONES ya que el requerimiento inicial de mantener todas las sedes de MIGRACIONES interconectadas con radios sistema TETRA para casos de emergencias, no tendría sentido si ahora el requerimiento cambia a

radios de comunicación corta para un solo local y que no tendrá alcance o comunicación con otra sede.

Ahora a la absolución de las consultas 12 realizada a la empresa AVP SEGURIDAD SAC, realiza la misma observación aduciendo que el sistema de comunicación TETRA es muy costo y restrictivo para las empresas, a lo que MIGRACIONES acoge también la observación retirando de las bases la exigencia de conexión con sistema de comunicación TETRA para las radios requeridas.

Sobre el particular, es preciso indicar que con el requerimiento de las bases se realizó el estudio de mercado y las empresas participantes manifestaron cumplir con el requerimiento de radios con sistema de comunicación TETRA. Asimismo, no podría ser restrictivo un equipo que es libre de contratar o alquilado por cualquier empresa.

Por tanto los argumentos de la empresa para el retiro del sistema de radio resultan infundados, por lo que solicitamos restituir el requerimiento inicial de los TDR.

Ahora, de mantenerse en los TDR lo absuelto por MIGRACIONES, las radios con sistema de comunicación radial emitido por el MTC del sistema VHF, sus permisos otorgados en caso de consorcios no podrían ser utilizados ya que no pueden ser cedidos, prestados o alquilados a sus otros consorciados, debiendo cada empresa que ejecutar los servicios contar con sus propios permisos de radio emitidos por el MTC según lo dispone el PRONUNCIAMIENTO 248-2023/OSCE-DGR”. [Sic] (el subrayado y resaltado es agregado)

Pronunciamiento

En principio, resulta pertinente aclarar que los pronunciamientos emitidos por esta Dirección, son el resultado de una acción de supervisión de parte respecto de los cuestionamientos al pliego absolutorio de un determinado procedimiento de selección, siendo que cada pronunciamiento es independiente de los demás y no resulta vinculante para otros supuestos; asimismo, corresponde acotar que las disposiciones consignadas en los pronunciamientos se realizan en función al análisis integral de la información proporcionada por las Entidades, con ocasión del trámite de solicitud de elevación, razón por la cual no resultaría factible pretender vincular situaciones que, aunque parezcan devenir de actuaciones similares, responderían a un análisis y a supuestos distintos.

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento (en el caso de servicios, los términos de referencia y los requisitos de calificación), debiendo éstos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, lo cual incluye, el equipamiento.

Ahora bien, de la revisión del literal c) previsto en el acápite 5.1.5 “cuadro de puestos, equipamientos y vestuario” consignado en el numeral 3.1 y el literal B.1 del numeral 3.2 “requisitos de calificación”, ambos del Capítulo III del requerimiento de las Bases de la convocatoria, se aprecia que la Entidad requirió que el contratista cuente con radio portátil, el cual debía ser acreditado en la presentación de ofertas.

Así, se aprecia que en ambos extremos de las Bases, se requirió como equipamiento, entre otros, el *“Radio portátil: Cada radio debe de contar con cargador de baterías, con 01 batería de repuesto por radio para garantizar las comunicaciones durante las 24 horas. Cabe precisar que los equipos de radio solicitados deberán ser radios digitales troncalizado sin necesidad de incluir tarjetas adicionales, en frecuencia ciudadana UHF o VHF que permita la comunicación grupal de escucha inmediata, con soporte de conexión a red móvil TETRA, bluetooth incorporado para operación mano libres, debe contar con audífonos. El Contratista debe presentar autorización de uso de frecuencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC”*.

Adicionalmente, en el numeral 3.2 “requisitos de calificación”, la Entidad consignó la forma de acreditación del equipamiento estratégico según las Bases estándar objeto de la presente convocatoria, esto es a través de la *“copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido”*.

En relación a ello, en el pliego absolutorio se realizaron consultas y observaciones y su correspondiente absolución, conforme al detalle siguiente:

- **Respecto a la consulta u observación N° 6**, se solicitó suprimir el requisito de radios troncalizados con soporte de conexión a red móvil TETRA, alegando que no serían necesarios ya que los radios contarían con una frecuencia que permite tener comunicación exitosa, y en caso de suceder cualquier eventualidad no habría problemas de conexión.
- **Respecto a la consulta u observación N° 12**, se solicitó suprimir los 17 radios de comunicación troncalizada portátiles que se solicitarían en el presente procedimiento de selección, alegando, entre otros, que i) el servicio troncalizado sería un servicio público móvil y serviría para operar en grandes cantidades de radios portátiles, ii) requiere de un permiso especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, iii) exigirían características mínimas que direccionarían a una marca en específico y iv) su costo ascendería de 800 a 900 dólares por radio troncalizado etsi tetra.

Ante lo cual el comité de selección decidió acoger lo solicitado, efectuando algunas precisiones en el literal c) del numeral 5.1.5 y requisitos de calificación de las Bases Integradas, quedando el texto siguiente: *“Radio portátil: Cada radio debe de contar con cargador de baterías, con 01 batería de repuesto por radio, para garantizar las comunicaciones durante las 24 horas. Cabe precisar que los equipos de radio solicitados deberán ser radios digitales sin necesidad de incluir tarjetas adicionales, en frecuencia ciudadana UHF o VHF u otra tecnología que permita una intercomunicación segura y fluida entre las sedes de Migraciones de Lima y Callao (Ver lista de Sedes en el Cuadro Resumen de puestos de seguridad y vigilancia y equipamiento por sede), bluetooth incorporado para operación manos libres, debe contar con audífonos. El Contratista debe presentar autorización de uso de frecuencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC”*.

En vista de ello, el recurrente en su solicitud de elevación cuestionó la absolución brindada por el comité de selección, aludiendo lo siguiente:

i) al retirar de las bases la exigencia de conexión con sistema de comunicación TETRA para las radios requeridas en la presente contratación, iría en perjuicio de la Entidad, pues el requerimiento de cambio de radios generaría una comunicación corta para un solo local y que no tendrá alcance o comunicación con otra sede;

ii) en cuando al retiro del requisito por al argumento de que resultaría muy costoso y restrictivo para las empresas, manifestó que, lo cuestionado habría formado parte del requerimiento inicial que fue objeto de indagación de mercado y en donde las empresas participantes manifestaron su cumplimiento; y,

iii) de mantenerse en los términos de referencia lo absuelto por la Entidad, las radios con sistema de comunicación radial emitido por el MTC del sistema VHF, sus permisos otorgados en caso de consorcio no podrían ser utilizados ya que no podrían ser cedidos, prestados o alquilados a sus otros consorciados, debiendo la empresa que ejecutará los servicios contar con sus propios permisos de radio emitidos por el MTC. Solicitando de esta manera, restituir el requerimiento inicial de las radios portátiles consignadas en los términos de referencia.

Es así que, mediante el INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES⁶, el área usuaria de la Entidad señaló lo siguiente:

“(…)
Precisión técnica y motivada: Nuestra posición es con finalidad de garantizar la pluralidad de postores, suprimiéndose el requisito de radio TETRA, no se afecta la calidad del servicio requerido (...). Por consiguiente, se promueve el principio de libertad de concurrencia establecido en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO sin afectar la calidad del servicio requerido.
(...)” (El subrayado y resaltado es agregado)

Aunado a ello, mediante el INFORME N° 001092-2023-UCP-MIGRACIONES⁷, la Entidad precisó lo siguiente:

“(…)
La totalidad de necesidad de intercomunicación de la Entidad se cubrirá con el requerimiento de radios digitales con tecnología de comunicación segura y fluida entre las sedes de Migraciones de Lima y Callao, en frecuencia ciudadana UHF o VHF u otra tecnología., a la vez que se busca garantizar la pluralidad de postores sin afectarse la calidad del servicio; además garantizará que el servicio sea prestado eficientemente en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
(…)
Para la presente contratación se ha requerido la AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE para el caso de frecuencias ciudadanas UHF o VHF o la tecnología que permita la intercomunicación grupal de escucha inmediata con radios digitales con tecnología de comunicación segura y fluida entre las sedes de Migraciones de Lima y Callao.

⁶ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

⁷ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-25002706-LIMA, en fecha 15 de agosto de 2023.

Asimismo, se precisa que, la autorización estará a nombre del postor y/o consorcio o se podría alquilar y ser brindado por un tercero o subcontratista, esto va garantizar la pluralidad de postores si afectarse la calidad del servicio, permitiendo que el servicio a contratar sea prestado eficientemente."(El subrayado y resaltado es agregado)

Ahora bien, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que, lo siguiente:

- En cuanto al argumento de que, el citado requisito no debería haberse retirado, porque las radios sistema TETRA habrían formado parte del requerimiento inicial que fue objeto de indagación de mercado y en donde las empresas participantes manifestaron su cumplimiento.

Sobre el particular, la Entidad habría señalado que, el retirar el cuestionado requisito promueve la pluralidad de postores sin afectar la calidad del servicio, lo cual no resultaría contrario a la normativa de contrataciones, máxime si tendría como finalidad la concurrencia de postores.

- En cuanto al argumento de que, el citado requisito no debería haberse retirado, porque iría en perjuicio de la Entidad, pues el requerimiento de cambio de radios generaría una comunicación corta para un solo local y que no tendrá alcance o comunicación con otra sede.

Sobre el particular, la Entidad habría señalado que, al suprimir el requisito de radio sistema TETRA no se afectaría la calidad del servicio requerido; y que, la totalidad de necesidad de intercomunicación de la Entidad se cubriría con el requerimiento de radios digitales con tecnología de comunicación segura y fluida entre las sedes de Migraciones de Lima y Callao.

- En cuanto al argumento de que, de mantenerse en los términos de referencia lo absuelto por la Entidad, las radios con sistema de comunicación radial emitido por el MTC del sistema VHF, sus permisos otorgados en caso de consorcio no podrían ser utilizados ya que no podrían ser cedidos, prestados o alquilados a sus otros consorciados, debiendo cada empresa que ejecutar los servicios contar con sus propios permisos de radio emitidos por el MTC.

Sobre el particular, la Entidad habría señalado que, para la presente contratación se habría requerido la autorización del Ministerio de Transporte para el caso de frecuencias ciudadanas UHF o VHF o la tecnología, es decir, no necesariamente el sistema radial debería tener sistema VHF; lo cual, según la Entidad permitiría la intercomunicación grupal de escucha inmediata con radios digitales con tecnología de comunicación segura y fluida entre las sedes de Migraciones de Lima y Callao; siendo que además, habría señalado que esta autorización podría estar a nombre del postor y/o consorcio o se podría alquilar y ser brindado por un tercero o subcontratista, garantizando una mayor la pluralidad de postores.

Así se puede colegir que, el área usuaria de la Entidad, como conocedora de sus necesidades y responsable de determinar las características y/o condiciones de su

requerimiento⁸, habría ratificado la necesidad de contar con los “radios digitales sin necesidad de incluir tarjetas adicionales, en frecuencia ciudadana UHF o VHF u otra tecnología que permita una intercomunicación segura y fluida entre las sedes de Migraciones de Lima y Callao”, bajo las razones expuestas en el citado informe. Siendo que, lo declarado por el área usuaria de la Entidad, tiene calidad de declaración jurada y está sujeta a rendición de cuentas.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que la Entidad restituya el requerimiento inicial de las radios portátiles consignadas en los términos de referencia, y en la medida que, la Entidad mediante su Informe posterior brindó mayores alcances de lo absuelto, por las cuales no aceptó lo solicitado por el recurrente, según lo expuesto precedentemente⁹, este Organismo Técnico Especializado, ha decidido **NO ACOGER** el presente cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, el pliego absolutorio y el informe técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 2

Respecto al “uso correcto del vehículo”

La empresa participante PROTECCION Y RESGUARDO S.A., cuestionó la absolución de la consulta y observación N° 46, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamientos lo siguiente:

“(…)
En la absolución a la consulta, MIGRACIONES no responde con claridad todas las interrogantes de la empresa para saber el uso correcto del vehículo como son:
¿Si el vehículo será de uso parcial o exclusivo del servicio?
¿El vehículo será usado 12 o 24 horas al día? Solo mencionan que otorgaran una cochera en el turno día de lunes a sábado pero no mencionan que pasara durante la noche o si su necesidad solo será para el turno día

Por lo expuesto, solicitamos que MIGRACIONES, responda de manera clara las consultas realizadas a fin que sepa con claridad las responsabilidades del vehículo.”[Sic]
(El subrayado y resaltado es agregado).

Pronunciamiento

⁸ Ver la Opinión N.º 002-2020/DTN, entre otras, así como lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento.

⁹ Cabe agregar que, el OSCE no tiene calidad de perito técnico dirimente respecto a la pertinencia de las características técnicas del requerimiento; sin embargo, puede requerir a la Entidad informes que contengan la posición técnica al respecto, conforme al Comunicado N°011-2013-OSCE/PRE.

Al respecto, de la revisión literal c) del acápite 5.1.5 contenido en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases administrativas, la Entidad contempló información relativa del vehículo como equipamiento para la presente contratación.

En relación a ello, a través de la consulta N° 46, el participante GEPSI SELVA S.A.C., en atención al vehículo requerido para el presente servicio, realizó una serie de consultas de acuerdo al siguiente detalle:

- ¿Por lo expuesto consultamos si el vehículo será a uso parcial o exclusivo del servicio?
- ¿Dónde deberá estar estacionado el vehículo y si MIGRACIONES otorgará un espacio para su estacionamiento?
- ¿El vehículo será usado estrictamente para funciones propias del servicio o será usado también para las comisiones que disponga el encargado de la seguridad de MIGRACIONES?
- ¿El chofer del vehículo deberá ser adicional a los puestos de vigilancia y será por cuenta de la empresa contratista?
- ¿El vehículo será usado 12 horas 24 horas del día?

Ante lo cual el comité de selección decidió acoger las consultas, por lo que indicó que en relación a la consulta sobre el chofer del vehículo, este debería ceñirse a lo que indican los términos de referencia; asimismo, efectuó precisiones en el literal c) del acápite 5.1.5, referidas a que se otorgará un espacio para el vehículo en la sede central desde las 7:00 hasta las 19:00 horas de lunes a sábado para actividades vinculadas a la ejecución del contrato. Como se aprecia, la Entidad no habría brindado todos los alcances de lo consultado por el participante.

En vista de ello, el recurrente en su solicitud de elevación cuestionó la absolución brindada por el comité de selección, aludiendo que no se habría respondido con claridad determinadas interrogantes planteadas en la consulta u observación en cuestión, para saber el uso correcto del vehículo, por lo que solicitaría responder de manera clara las consultas realizadas.

Es así que, mediante el INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES¹⁰, el área usuaria de la Entidad señaló lo siguiente:

“Consulta N° 46 (...)

Precisión técnica y motivada: A fin de no vulnerar el principio de eficacia y eficiencia establecido en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, se otorga más precisiones:

- ***El vehículo será a uso exclusivo, en horario de 12 horas de 07:00 am a 19:00 pm de lunes a sábado.***
- ***La entidad otorgará un espacio para el estacionamiento del vehículo en la Sede Central, donde cuenta con playa de estacionamiento vehicular.***
- ***Las actividades que se ejecutarán serán estrictamente para funciones propias del servicio de seguridad y vigilancia.***

¹⁰ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

- El chofer del vehículo deberá ser adicional a los puestos de vigilancia y será por cuenta de la empresa contratista. (El subrayado y resaltado es agregado).

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades¹¹, recién a través de su Informe, habría respondido todas las interrogantes formuladas en la consulta u observación en cuestión, indicando, entre otros, que “el vehículo será de uso exclusivo, en horario de 12 horas de 07:00 am a 19:00 pm de lunes a sábado”, con lo cual habría aclarado y brindando así los alcances de lo formulado y/o solicitado por el recurrente, complementando lo absuelto mediante pliego absolutorio.

Sin perjuicio de ello, considerando que, en atención a la absolución de las consultas u observaciones N° 119 y N° 120 se dispuso realizar ajustes al extremo de las Bases Integradas relativas al vehículo requerido, y luego de corroborar que estas no habrían sido incorporadas, se dispondrá su debida incorporación conforme al principio de transparencia.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que, la Entidad responda de manera clara las consultas realizadas en la consulta u observación en cuestión a efectos de conocer las responsabilidades del vehículo; y en la medida que, mediante informe la Entidad habría cumplido con responder de forma íntegra lo formulado y/o solicitado en la consulta u observación N° 46, según lo expuesto precedentemente¹², este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER** el presente cuestionamiento; por lo que, se implementarán las disposiciones siguientes:

- Se **deberá tener en cuenta**¹³ como ampliación de lo absuelto en la consulta u observación N° 46, lo citado del INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES, siendo esto lo siguiente:

“A fin de no vulnerar el principio de eficacia y eficiencia establecido en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, se otorga más precisiones:

- *El vehículo será a uso exclusivo, en horario de 12 horas de 07:00 am a 19:00 pm de lunes a sábado.*
- *La entidad otorgará un espacio para el estacionamiento del vehículo en la Sede Central, donde cuenta con playa de estacionamiento vehicular.*
- *Las actividades que se ejecutarán serán estrictamente para funciones propias del servicio de seguridad y vigilancia.*
- *El chofer del vehículo deberá ser adicional a los puestos de vigilancia y será por cuenta de la empresa contratista.”*

¹¹ Ver la Opinión N.º 002-2020/DTN, entre otras, así como lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento.

¹² Cabe agregar que, el OSCE no tiene calidad de perito técnico dirimente respecto a la pertinencia de las características técnicas del requerimiento; sin embargo, puede requerir a la Entidad informes que contengan la posición técnica al respecto, conforme al Comunicado N°011-2013-OSCE/PRE.

¹³ Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases.

- Se **adecuará** en el literal c) del acápite 5.1.5, contenido en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas definitivas, lo siguiente:

“(…)

- *Un (1) vehículo para las actividades que se requieran en beneficio del servicio de seguridad y vigilancia que coordine el responsable de seguridad para las sedes de Lima y Callao. El vehículo no debe superar la antigüedad de tres (3) años y debe contar con toda la documentación para circular por vía pública (SOAT, tarjeta de propiedad, etc.). Asimismo, la empresa CONTRATISTA debe asignar un personal chofer con licencia de conductor mínimo de categoría A1, el chofer deberá contar con récord de conductor sin sanciones ni papeletas de tránsito (REPORTE QUE SE ENTREGARÁ MENSUALMENTE EN LOS INFORMES DE CADA MES, CONJUNTAMENTE CON LA BITACORA CORRESPONDIENTE). El kilometraje aproximado de recorrido no superara los 250 Km mensuales.*

~~*La entidad otorgará un espacio para el estacionamiento del vehículo en la Sede Central, desde las 07:00 hasta las 19:00 horas de lunes a sábado, y serán para actividades vinculadas a la ejecución del servicio.*~~

- *El vehículo será a uso exclusivo, en horario de 12 horas de 07:00 am a 19:00 pm de lunes a sábado.*
- *La entidad otorgará un espacio para el estacionamiento del vehículo en la Sede Central, donde cuenta con playa de estacionamiento vehicular.*
- *Las actividades que se ejecutarán serán estrictamente para funciones propias del servicio de seguridad y vigilancia.*
- *El chofer del vehículo deberá ser adicional a los puestos de vigilancia y será por cuenta de la empresa contratista.*

Así mismo, el contratista es asumirá el combustible y los mantenimientos (preventivo y correctivo) del vehículo.

(…)”

- **Corresponderá al Titular de la Entidad**, implementar las directrices pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el área usuaria de la Entidad, cumpla con absolver de forma clara y precisa a los extremos consultados, conforme a lo dispuesto en el Principio de Transparencia que regula toda contratación estatal; a fin de reducir la ocurrencia de situaciones que deban corregirse con posterioridad.
- Se **deberá dejar sin efecto** toda disposición del pliego absolutorio, las Bases o informe técnico que se opongan a la presente disposición.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 3

Respecto a la “tarjeta de propiedad de las armas”

La empresa participante **PROTECCION Y RESGUARDO S.A.**, cuestionó la absolución de las consultas y observaciones N° 16, N° 18 y N° 27, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamientos lo siguiente:

Respecto a la consulta y/u observación N° 16

“(…)

En la consulta realizara por la empresa AVP SEGURIDAD, respecto a una supuesta contradicción de las bases, MIGRACIONES absuelve las consultas retirando de las bases la presentación de las tarjetas de propiedad de las armas, requerimiento que según Ley de Seguridad Privada es indispensable para el uso legal y correcto del arma de fuego ya que sin la tarjetas de propiedad, no se podría verificar quien es el propietario del arma y si cumple con estar registrada el arma ante SUCAMEC.

Asimismo, se debe considerar que el uso de armas se debe hacer en estricto cumplimiento de la Ley 30299 y el DL 1213, Ley de Seguridad Privada. Resulta importante precisar que el uso de armas únicamente puede ser por el propietario del arma y en el caso de las empresas de vigilancia por el vigilante perteneciente a la empresa propietaria del arma, debiendo el vigilante portar su carnet SUCAMEC, Licencia de portar armamento de fuego y la tarjeta de propiedad del arma; hacer y permitir lo contrario, contraviene la Ley Vigente.

Por lo expuesto, elevamos la presente absolución a fin que se restituya en las bases para los puestos armados la presentación de las tarjetas de propiedad de las armas y aclarar que las armas únicamente pueden ser utilizadas por el propietario del arma y en el caso de las empresas de seguridad que ejecutan contratos en consorcio, por el vigilante perteneciente a la empresa propietaria del arma, debiendo quedar prohibido el préstamo, cesión en uso o que un vigilante perteneciente a la empresa A, utilice las armas de propiedad de la empresa B o C.”[Sic] (El subrayado y resaltado es agregado).

Respecto a la consulta y/u observación N° 18

“(…)

En los argumentos de la consulta 18 efectuada por la empresa AVP, argumenta que el requerimiento de los requisitos de calificación equipamiento estratégico, se contradice con los TDR respecto a las armas, sin ampliar o sustentar su argumento y extrañamente MIGRACIONES decide suprimir todo el requerimiento presentar y sustentar en la oferta el equipamiento estratégico según el Literal B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO de los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

Por lo expuesto, solicitamos se restituya el requerimiento de las bases ya que al parecer buscaría favorecer a la mencionada empresa que tal vez no cuenta con los equipos requeridos por las bases o no cuenta con armas para el servicio.

Resulta importante precisar que con los TDR de las bases se realizó el estudio de mercado y las empresas no presentaron cuestionamientos al respecto.

Asimismo, debemos mencionar que el requerimiento de equipamiento estratégico no contradice las bases ni vulnera las bases estándar o la normativa de contrataciones con el estado.”[Sic] (El subrayado y resaltado es agregado).

Respecto a la consulta y/u observación N° 27

“(…)

En los argumentos de la consulta 27 de la empresa GEPSI, argumenta que en caso de los vigilantes armados, en su legajo deberán acreditar la tarjeta de propiedad del arma que utilizará, siendo la respuesta de MIGRACIONES que se podrá presentar un compromiso de posesión, compromiso de compra venta, o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del arma, absolución que contraviene la Ley 30299 y el D.L. N° 1213, Ley de Seguridad Privada, ya que las armas únicamente pueden ser usadas con tarjeta de propiedad.

Cabe precisar que usar o portar un arma que no esté registrada en SUCAMEC es un delito penal que tal vez MIGRACIONES no este contemplado o desconoce. Por lo expuesto elevamos la presente absolución en aras que se preserve el cumplimiento de la Ley y se exija a las empresas acreditar correctamente a sus vigilantes que utilizaran armamento de fuego.”[Sic] (El subrayado y resaltado es agregado).

Pronunciamiento

Al respecto, cabe indicar que el numeral 29.6 del artículo 29 del Reglamento dispone que el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio.

Por su parte, cabe señalar que, el Decreto Legislativo N° 1213 “Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada”, indica en el artículo 32 “Autorización de funcionamiento”, Capítulo IV que “(...) las personas jurídicas que prestan o desarrollan servicios de seguridad privada, deben obtener la autorización de funcionamiento expedida por la SUCAMEC, que es intransferible y tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su emisión” asimismo dicha autorización es renovable sucesivamente por igual período.

Aunado a ello, el literal b) del artículo 25 del mismo decreto, dispone que una de las obligaciones del personal de seguridad es portar la licencia de uso de arma de fuego vigente, así como la tarjeta de propiedad expedida por la SUCAMEC a nombre de la empresa de seguridad, cuando corresponda.

Además, corresponde traer a colación la Ley N° 30299 “Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil”, que establece lo siguiente:

Artículo 24. Otorgamiento de tarjeta de propiedad de arma de fuego

24.1 El titular de una licencia de uso de armas de fuego puede ser propietario de los tipos de armas regulados por la presente Ley. Para cada arma, la SUCAMEC otorga una tarjeta de propiedad de arma de fuego, documento que identifica a su titular, la cual no tiene caducidad mientras el propietario mantenga la propiedad del arma de fuego.

(...)

24.5 Las tarjetas de propiedad de las armas adquiridas por las empresas de servicios de seguridad y vigilancia son emitidas a nombre de estas. Estas armas solo son usadas por los agentes de seguridad que cuenten con licencia de uso de armas de fuego vigente. Es responsabilidad de la empresa de servicios de seguridad privada verificar que el personal a su cargo cuente con la licencia de uso vigente, bajo responsabilidad y la correspondiente sanción administrativa.

(...)”

Por otro lado, cabe señalar que, de acuerdo al numeral 7.4.2 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, para el caso de la contratación de bienes y servicios, se establece que **en la promesa de consorcio cada integrante debe precisar las obligaciones a las que se compromete en la ejecución del objeto de la contratación**, estén o no vinculadas directamente a dicho objeto, pudiendo estar relacionadas a otros aspectos, como administrativos, económicos, financieros, entre otros, debiendo aplicar en el caso de bienes, lo previsto en el acápite 4 del numeral 7.5.2.

En tal sentido, de la normativa citada, se desprende que aquellas empresas que quieran prestar el servicio de seguridad privada, previamente, deben contar con la autorización expedida por SUCAMEC, y además es una obligación del personal de seguridad portar entre otros, la tarjeta de propiedad expedida por la SUCAMEC a nombre de la empresa de seguridad.

Ahora bien, en el caso de los consorcios, la o las empresas que se comprometieron a ejecutar el objeto de la contratación, de acuerdo con las obligaciones comprometidas, deberá contar con la tarjeta de propiedad de las armas adquiridas a su nombre y que dichas armas solo podrán ser usadas por sus agentes de seguridad que cuenten con licencia de uso de armas de fuego vigente.

Adicionalmente, las Bases estándar objeto de la presente convocatoria, disponen que, la acreditación del equipamiento estratégico se realizará conjuntamente con la presentación de la oferta - etapa de calificación -, únicamente con “copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido”.

Sobre este último, cabe recordar la importancia del concepto de disponibilidad¹⁴, el cual responde a la capacidad de asegurar ante la Entidad que los bienes considerados por ésta como estratégicos para un servicio determinado, estarán realmente a disposición del postor que los ofrece, sea porque el postor ya es el propietario o poseedor de los bienes en cuestión (para lo cual bastará que la documentación presentada acredite alguna de dichas condiciones) o porque, aun sin tener la calidad de propietario o poseedor, puede acreditar de alguna manera que los posee legítimamente y, por tanto, asume el compromiso de proveer tales bienes, asumiendo ya sea el compromiso de comprarlos, alquilarlos o cualquier otra modalidad contractual que asegure ponerlos a disposición de la ejecución contractual. Debe quedar claro entonces que el concepto de disponibilidad es más que una mera declaración de voluntad del propio postor de adquirir esos bienes, o de un tercero de venderlos, sino que es relevante que dicho compromiso genere certeza en el colegiado a fin de considerar debidamente acreditado dicho requisito de calificación para así satisfacer la necesidad de su exigencia en las bases.

Dicho lo anterior, si bien las Bases Estándar establecen que la acreditación del equipamiento estratégico se realizará mediante la presentación de determinados documentos, dicha forma de acreditación no subroga o excluye las habilitaciones del uso de las armas de fuego que la normativa especial de la materia habría determinado.

¹⁴ Según numeral 29 de la Resolución N° 826-2021-TCE-S3.

Ahora bien, considerando los aspectos cuestionados por el recurrente, se efectuará el análisis bajo los siguientes extremos:

a) Respecto a la restitución de la acreditación de tarjeta de propiedad (consultas y observaciones N° 16 y N° 18)

Sobre el particular, en el pliego absolutorio se realizaron las siguientes consultas y observaciones y su correspondiente absolución, conforme al detalle siguiente:

- **Respecto a la consulta u observación N° 16**, se cuestionó que para la acreditación de los revólveres no se estaría admitiendo el compromiso de compra y venta, contradiciéndose con la pag 37, siendo que en el caso de que los consorciados tengan que ser 50-50 de participación, no podría existir consorciado con mayor porcentaje.
- **Respecto a la consulta u observación N° 18**, se observó la contradicción entre los extremos de las Bases referidos a los revólveres, en específico, sobre su “acreditación”.

Para las citadas consultas y observaciones, el comité de selección acogió las mismas, precisando que se suprimiría la forma de acreditación de los revólveres que contradice las Bases estándar del procedimiento de selección.

En vista de ello, el recurrente en su solicitud de elevación, cuestionó la absolución de las consultas u observaciones materia de análisis, precisando entre otros aspectos lo siguiente:

- En relación a la consulta N° 16, cuestionó que la Entidad haya suprimido de las bases, con ocasión al pliego absolutorio, la presentación de las tarjetas de propiedad de las armas, argumentando que dicho requisito sería indispensable conforme a la Ley de Seguridad Privada, ya que sin las citadas tarjetas no se podría verificar quien es el propietario del arma y el cumplimiento de su registro ante SUCAMEC; solicitando su restitución en las bases integradas con la aclaración de que las armas solo pueden ser utilizadas por su propietario, siendo que, en el caso de empresas de seguridad que ejecutan contratos en consorcios, correspondería al vigilante perteneciente a la empresa propietaria del arma.
- Aunado a ello, en relación a la consulta N° 18, cuestionó que la Entidad haya suprimido en el equipamiento estratégico de las bases, con ocasión al pliego absolutorio, el requerimiento (la presentación de las tarjetas de propiedad) relativo a las armas, argumentando que, el requerimiento de equipamiento estratégico no se contradice con las Bases; solicitando su restitución en las bases integradas.

Es así que, mediante el INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES¹⁵, el área usuaria de la Entidad señaló lo siguiente:

¹⁵ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

“Consulta N° 16

Precisión técnica y motivada: Nuestra posición es con finalidad de homogenizar el requerimiento con las Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de servicios de vigilancia privada respecto a la Acreditación del punto 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO. Al respecto de la acreditación de los revólveres con copia de tarjeta de propiedad, la misma estará a cargo de consorciado que establezca la responsabilidad de sustentar las mismas. Por consiguiente, se promueve el principio de libertad de concurrencia establecido en el Artículo 2 de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

(...)

Consulta N° 18

Precisión técnica y motivada: Nuestra posición es con finalidad de homogenizar el requerimiento con las Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de servicios de vigilancia privada respecto a la Acreditación del punto 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO. Por consiguiente, se promueve el principio de libertad de concurrencia establecido en el Artículo 2 de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

(...)”. (el subrayado y resaltado es agregado).

Ahora bien, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, corresponde señalar lo siguiente:

- Mediante Informe Técnico posterior la Entidad habría señalado que, su posición de suprimir parte del requerimiento con ocasión al pliego absolutorio, habría sido con la finalidad de homogeneizar el requerimiento (relativo a la “presentación de las tarjetas de propiedad de los revólveres” para el personal de seguridad y vigilancia) con el punto 3.2 Requisitos de calificación del “equipamiento estratégico”.

Sobre dicha decisión, se advierte que, el haber suprimido la referida acreditación de los revólveres con las citadas tarjetas de propiedad en el “equipamiento estratégico” de los requisitos de calificación, resultaría acorde a las Bases estándar objeto de la presente convocatoria, puesto que estas disponen que, la acreditación del equipamiento estratégico se acreditará para la oferta a través de la “copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido”.

Sin embargo, el haber suprimido la referida acreditación de los revólveres a través de citadas tarjetas de propiedad en el equipamiento de los términos de referencia, habría ocasionado que los participantes interpreten que no sería necesario que la tarjeta de propiedad esté a nombre de la empresa de seguridad que prestará el servicio; siendo que, en el caso de los consorcios, la o las empresas que se comprometieron a ejecutar el objeto de la contratación, de acuerdo con las obligaciones comprometidas, deberá contar con la tarjeta de propiedad de las armas adquiridas a su nombre y que dichas armas solo podrán ser usadas por sus agentes de seguridad que cuenten con licencia de uso de armas de fuego vigente.

Pues bien, considerando que en la presentación de ofertas se requiere la acreditación de la disponibilidad del equipamiento estratégico y en virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1213 y Ley N° 30299, antes citados, corresponde que la acreditación de la tarjeta de propiedad de los revólveres a nombre de la empresa de seguridad que prestará el servicio o, en caso de consorcios, a nombre de los integrantes del consorcio que establecieron las obligaciones de ejecutar efectivamente el servicio objeto de contratación; será acreditado documentalmente por el contratista para el inicio efectivo del servicio objeto de la presente contratación.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que se restituya en las bases la presentación de la tarjeta de propiedad de las armas con la aclaración de que las armas solo pueden ser utilizadas por su propietario, siendo que, en el caso de empresas de seguridad que ejecutan contratos en consorcios, correspondería al vigilante perteneciente a la empresa propietaria del arma; y lo expuesto precedentemente, este Organismo Técnico ha decidido **ACOGER PARCIALMENTE** el presente cuestionamiento; por lo que, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- Se **adecuará** en el literal c) del acápite 5.1.5 del numeral 3.1 “términos de referencia” de las Bases integradas definitivas, lo siguiente:

“(…)

- Revólver: (…)

La acreditación de la tarjeta de propiedad de los revólveres a nombre de la empresa de seguridad que prestará el servicio o, en caso de consorcios, a nombre de los integrantes del consorcio que establecieron las obligaciones de ejecutar efectivamente el servicio objeto de contratación; será acreditado documentalmente por el contratista para el inicio efectivo del servicio objeto de la presente contratación.

(…)”.

- Se **dejará sin efecto** todo extremo del Pliego, las Bases o Informe Técnico que se opongan a las precedentes disposiciones.

b) Respecto al legajo del personal (consulta u observación N° 27)

Sobre el particular, mediante consulta u observación N° 27, se consultó, si en cada legajo de personal armado se debería incluir la presentación de la tarjeta de propiedad del arma que usará; ante lo cual, el comité de selección señaló que, la acreditación de la tarjeta de propiedad del arma sería mediante: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

En vista de ello, el recurrente en su solicitud de elevación, cuestionó que la Entidad haya precisado como documentos para acreditar la tarjeta de propiedad del arma, el compromiso de posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del arma, alegando que dicha

absolución contraviene la Ley N° 30299 y el Decreto Legislativo N° 1213, ya que las armas únicamente podrían ser usadas con la tarjeta de propiedad; solicitando exigir a las empresas que cumplan con acreditar correctamente a sus vigilantes que utilizarán armamento de fuego.

Es así que, mediante el INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES¹⁶, el área usuaria de la Entidad señaló lo siguiente:

“Consulta N° 27

Precisión técnica y motivada: Nuestra posición es con finalidad de homogenizar el requerimiento con las Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de servicios de vigilancia privada respecto a la Acreditación indicada en el 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO. Por consiguiente, se promueve el principio de libertad de concurrencia y el principio de Igualdad de trato establecido en el Artículo 2 de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Al respecto, de lo que debe contener cada legajo del personal se ha precisado en los términos de referencia lo que debe contener donde no se ha indicado que el personal armado deberá incluir en el legajo la presentación de la tarjeta de propiedad del arma que usará. Así también se debe precisar que como área usuaria somos responsables de definir con precisión las especificaciones técnicas, de tal forma que no oriente la adquisición hacia un postor, que permita la concurrencia de pluralidad de postores; ello, además de cumplir con los principios que rigen las contrataciones del Estado, de manera que las contrataciones que realicen las Entidades del Sector Público cumplan con maximizar el valor del dinero del contribuyente y se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad.” (el subrayado y resaltado es agregado).

Ahora bien, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, en relación al contenido del legajo del personal armado, se advierte que mediante consulta u observación N° 27, la Entidad precisó que la acreditación de la tarjeta de propiedad del arma sería mediante: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido; lo cual resultaría confuso, toda vez que, la tarjeta de propiedad del arma no sería un equipamiento estratégico.

Posteriormente, mediante Informe Técnico posterior la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades¹⁷, aclaró que los términos de referencia precisan los documentos a presentar, no advirtiéndose que el personal armado deba incluir en el legajo la presentación de la tarjeta de propiedad del arma que usará, lo cual resultaría razonable en la medida que, el área usuaria de la Entidad es la responsable de determinar su requerimiento; no obstante, ello no implica dejar de desconocer lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1213 y Ley N° 30299, mediante el cual se dispone que, sería una obligación del personal de seguridad portar la licencia de uso de arma de fuego vigente, así como la tarjeta de

¹⁶ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

¹⁷ Ver la Opinión N.º 002-2020/DTN, entre otras, así como lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento.

propiedad (documento que identifica al titular del arma de fuego) expedida por la SUCAMEC a nombre de la empresa de seguridad, cuando corresponda.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que se exija a las empresas acreditar correctamente a sus vigilantes que utilizaran armas de fuego, y en la medida que la Entidad recién aclaró el aspecto cuestionado, según lo expuesto precedentemente¹⁸, este Organismo Técnico ha decidido **ACOGER PARCIALMENTE** el presente cuestionamiento; por lo que, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- Se **deberá tener en cuenta**¹⁹ como absolución de la consulta u observación N° 27, lo citado del INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES, de fecha 31 de julio de 2023, remitido por la Entidad, en cuanto a lo siguiente: *“Al respecto, de lo que debe contener cada legajo del personal se ha precisado en los términos de referencia lo que debe contener donde no se ha indicado que el personal armado deberá incluir en el legajo la presentación de la tarjeta de propiedad del arma que usará. Así también se debe precisar que como área usuaria somos responsables de definir con precisión las especificaciones técnicas, de tal forma que no oriente la adquisición hacia un postor, que permita la concurrencia de pluralidad de postores; ello, además de cumplir con los principios que rigen las contrataciones del Estado, de manera que las contrataciones que realicen las Entidades del Sector Público cumplan con maximizar el valor del dinero del contribuyente y se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad.”*
- Se **deberá tener en cuenta**²⁰ lo dispuesto en el literal b) del artículo 25 del Decreto Legislativo N° 1213 “Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada”, en cuanto a que, una de las obligaciones del personal de seguridad es portar la licencia de uso de arma de fuego vigente, así como la tarjeta de propiedad expedida por la SUCAMEC a nombre de la empresa de seguridad, cuando corresponda.
- Corresponderá al Titular de la Entidad **implementar** las directrices pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla con absolver de forma clara y precisa las peticiones formuladas por los participantes en sus consultas y/u observaciones, permitiendo que reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos.
- Se **dejará sin efecto** todo extremo del Pliego, las Bases o Informe Técnico que se opongan a las precedentes disposiciones.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe

¹⁸ Cabe agregar que, el OSCE no tiene calidad de perito técnico dirimente respecto a la pertinencia de las características técnicas del requerimiento; sin embargo, puede requerir a la Entidad informes que contengan la posición técnica al respecto, conforme al Comunicado N°011-2013-OSCE/PRE.

¹⁹ Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases.

²⁰ Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases.

técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 4

Respecto a la “experiencia del postor en la especialidad”

La empresa participante PROTECCION Y RESGUARDO S.A, cuestionó la absolución de las consultas y observaciones N° 19 y N° 20, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamientos lo siguiente:

“(…)

En los argumentos de las consultas 18 y 19 efectuada por la empresa AVP, invoca el principio de libre concurrencia y MIGRACIONES opta por reducir el requisito de calificación de experiencia empresarial de S/ 20,000,000.00 a S/ 11,000,000.00 lo cual nos llama la atención ya que en consultas anteriores se le ha aceptado retirar de las bases requerimientos y ahora reducir el importe de facturación a la mitad, tal vez para ajustar el requerimiento a sus necesidades y posibilidades de infraestructura de facturación, lo cual contraviene los principios de Transparencia, Igualdad de Trato e Integridad ya que como bien mencionados, tal vez se estaría ajustando las bases y TDR a las necesidades de un postor en particular.

Resulta importante precisar que con los TDR se realizó el estudio de mercado y las empresas presentaron sus ofertas sin cuestionar el importe de facturación el que a nuestro parecer no resulta exorbitante para la magnitud del contrato que desea contratar MIGRACIONES.”[Sic] (el subrayado y resaltado es agregado)

Pronunciamiento

Al respecto, cabe señalar que, este Organismo Supervisor ha señalado en varias opiniones que la “experiencia” es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado. Dicha experiencia genera valor agregado para su titular, incrementando sus posibilidades de acceso a los contratos con el Estado.

Así, en las Bases Estándar objeto de presente contratación se establece que:

- i. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente no mayor a tres (3) veces el valor estimado de servicios de vigilancia en entidades públicas o privadas durante ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

En ese sentido, se advierte que la normativa de contrataciones del Estado dispone que la experiencia del postor en la ejecución de servicios de vigilancia se mide a través de su facturación de tres (3) veces el valor estimado.

Ahora bien, de la revisión del requerimiento contenido en Bases de la convocatoria, se aprecia que la Entidad requirió, entre otros, que el postor debía acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 20,000,000.00 (Veinte millones con 00/100 soles).

En relación a ello, a través de las consultas u observaciones N° 19 y N° 20, el participante AVP Y SEGURIDAD S.A.C., solicitó reducir la experiencia solicitada de 20 millones **a un valor que esté entre el rango de 11 a 12 millones.**

Ante lo cual el comité de selección decidió acoger lo solicitado, por lo que indicó que, en las bases integradas, se modificará la experiencia del postor en la especialidad bajo el siguiente texto “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 11, 000,000 (once millones y 00/100 soles)”.

En vista de ello, mediante la solicitud de elevación, el recurrente cuestionó la decisión del comité de selección al haber optado por reducir el requisito de calificación de experiencia empresarial de S/ 20,000,000.00 a S/ 11,000,000.00, argumentando que se estaría vulnerando el principio de transparencia, igualdad de trato e integridad ajustándose los términos de referencia a las necesidades de un postor en particular, ya que el monto inicial fue objeto de indagación de mercado y dicho aspecto no fue cuestionado por las empresas que presentaron sus ofertas.

Es así que, mediante el INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES²¹, el área usuaria de la Entidad señaló lo siguiente:

“Consulta N° 19 (...)

Precisión técnica y motivada: Nuestra posición es con finalidad de garantizar la pluralidad de postores, estableciéndose un monto menor respetando lo establecido en las BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA, que indica "CONSIGNAR EL MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO PODRÁ SER MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM". Por consiguiente, se promueve el principio de libertad de concurrencia establecido en el Artículo 2 de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

En efecto, esto va permitir la concurrencia de pluralidad de postores; asimismo, y además se evita establecer en las especificaciones características, requisitos y/o exigencias que sólo favorezcan a determinado postor o postores.

Consulta N° 20 (...)

Precisión técnica y motivada: Nuestra posición es con finalidad de garantizar la pluralidad de postores, estableciéndose un monto menor respetando lo establecido en las BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA, que indica "CONSIGNAR EL MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO PODRÁ SER MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM". Por consiguiente, se promueve el principio de libertad de

²¹ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

conurrencia establecido en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.” (El subrayado y resaltado es agregado)

Ahora bien, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, el área usuaria de la Entidad mediante el citado informe posterior²², ratificó lo absuelto mediante consulta u observación en cuestión; a través del cual, dispuso reducir el monto facturado a acreditar para la experiencia del postor en S/ 11'000,000.00 (once millones y 00/100 SOLES), indicando que, ello respetaría lo establecido en las Bases Estándar del concurso público para la contratación de servicios de vigilancia privada y permitiría una mayor concurrencia de pluralidad de postores.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a observar la reducción del monto facturado requerido al postor para acreditar experiencia; y, en la medida que, la Entidad ha ratificado sus absoluciones, según lo expuesto precedentemente²³; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **NO ACOGER** el presente cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 5

Respecto a la “renovación de prendas”

La empresa participante **PROTECCION Y RESGUARDO S.A**, cuestionó la absolución de la consulta y observación N° 30, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamientos lo siguiente:

“(…)

En los argumentos de la consulta 30 de la empresa GEPSI, consulta respecto a cuantas veces deberá ser renovada las prendas en el servicio y la respuesta de MIGRACIONES es que deberán ser 4 veces al año en los meses de marzo, setiembre, junio y diciembre, pero no se está considerando que el servicio posiblemente inicie en 1 o en los siguientes dos meses. Por tanto, podría existir la obligación de instalar el servicio y renovar las prendas en los meses mencionados en la absolución de consultas. lo cual significaría una cantidad mayor a los 4 meses absueltos.

Elevamos la presente absolución a fin que se defina con claridad cuantas veces durante el contrato se renovaran las prendas”. (El subrayado y resaltado es agregado).

²² Ver la Opinión N.º 002-2020/DTN, entre otras, así como lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento.

²³ Cabe agregar que, el OSCE no tiene calidad de perito técnico dirimente respecto a la pertinencia de las características técnicas del requerimiento; sin embargo, puede requerir a la Entidad informes que contengan la posición técnica al respecto, conforme al Comunicado N°011-2013-OSCE/PRE.

Pronunciamiento

Al respecto, de la revisión del numeral 1.8 del Capítulo I de las Bases de la convocatoria, se aprecia que el plazo de la presente contratación sería de mil noventa y seis (1,096) días calendario, es decir, tres (3) años.

Por su parte, de la revisión del literal f) del acápite 5.1.5 de los términos de referencia contenido en Bases de la convocatoria, se aprecia que la Entidad requirió, entre otros, el vestuario para el personal de seguridad y vigilancia, en donde estableció que *“deberán ser renovadas cada cambio de estación (4 veces al año, lo que se deberá indicar en el cronograma de trabajo de El Contratista)”*.

En relación a ello, a través de la consulta u observación N° 30, el participante GEPSI SELVA S.A.C., solicitó indiciar y determinar cuántas veces se deberán cambiar o renovar los uniformes durante el tiempo que dure el contrato.

Ante lo cual el comité de selección citó lo establecido en el literal f) del numeral 5.1.5 de los términos de referencia, el cual señala que *“las prendas de vestir deberán ser renovadas cada cambio de estación (4 veces al año, lo que se deberá indicar en el cronograma de trabajo de El Contratista). Además, indicó que, la página web del Estado peruano señala: otoño (marzo), primavera (septiembre), invierno (junio) y verano (diciembre).”*

En vista de ello, el recurrente cuestionó dicha absolución precisando, entre otros aspectos que, no se estaría considerando que el presente servicio de vigilancia y seguridad posiblemente inicie el 1° o en los siguientes dos meses, de lo indicado en la absolución (mes de marzo, septiembre, junio o diciembre) motivo por el cual podría existir la obligación de instalar el servicio y renovar las prendas en cualquiera de los meses mencionados, lo cual significaría una cantidad mayor a los 4 meses establecidos; solicitando que se defina con claridad cuántas veces durante el contrato se renovarán las prendas.

Es así que, mediante el INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES²⁴, el área usuaria de la Entidad señaló lo siguiente:

“Consulta N° 30 (...)”

Precisión técnica y motivada: Nuestra posición es a fin de garantizar contar con uniforme en buen estado por el personal de seguridad de la contratista considerando que el uniforme es de uso diario y los agentes de seguridad estarán destacados hasta seis (6) días por semana, *por lo consiguiente se ha determinado que corresponde renovar 11 (once) veces el uniforme durante el tiempo que dura el contrato sin contar el ingreso al inicio del contrato.*” (el subrayado y resaltado es agregado)

Ahora bien, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, corresponde señalar

²⁴ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

que, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades²⁵, mediante su informe técnico posterior aclaró que el uniforme será renovado 11 (once veces) durante el tiempo que dure el contrato sin contar el ingreso al inicio del mismo; lo cual resultaría razonable en la medida que, el área usuaria de la Entidad habría establecido para la presente contratación un plazo de duración de mil noventa y seis (1,096) días calendario, es decir, 3 años, con el cual estarían inmersos las veces de renovación de los uniformes señalados por la Entidad.

En ese sentido, considerando que la pretensión del participante estaría orientada aclarar cuantas veces durante el contrato se renovarán las prendas; y en la medida que la Entidad mediante el citado informe, aclaró la absolución en la consulta u observación en cuestión, según lo expuesto precedentemente²⁶; este Organismo Técnico Especializado ha decidió **ACOGER** el presente cuestionamiento; por lo que, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- Se **deberá tener en cuenta**²⁷ como ampliación de lo absuelto en la consulta u observación N° 30, lo citado del INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES, de fecha 31 de julio de 2023, remitido por la Entidad.
- Se **adecuará** en el literal f) del acápite 5.1.5 de los términos de referencia de las Bases estándar definitivas, lo siguiente:

“(…)

Las prendas de vestir, accesorios o distintivos, así como los implementos de seguridad, serán reemplazados o renovados necesariamente cuando estén desgastados o deteriorados, sin que ello de derecho a la empresa a reconocimiento económico alguno por parte de MIGRACIONES. El responsable de seguridad designado por la entidad verificará el cumplimiento de lo señalado. Asimismo, las prendas de vestir deberán ser renovadas cada cambio de estación (4 veces al año, lo que se deberá indicar en el cronograma de trabajo de El Contratista).

se ha determinado que corresponde renovar 11 (once) veces el uniforme durante el tiempo que dura el contrato sin contar el ingreso al inicio del contrato.

“(…)”.

- Corresponderá al Titular de la Entidad **implementar** las directrices pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin de que el comité de selección cumpla con absolver de forma clara y precisa las peticiones formuladas por los participantes en sus consultas y/u observaciones, permitiendo que reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos.

²⁵ Ver la Opinión N.º 002-2020/DTN, entre otras, así como lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento.

²⁶ Cabe agregar que, el OSCE no tiene calidad de perito técnico dirimente respecto a la pertinencia de las características técnicas del requerimiento; sin embargo, puede requerir a la Entidad informes que contengan la posición técnica al respecto, conforme al Comunicado N°011-2013-OSCE/PRE.

²⁷ Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases.

- Se **dejará sin efecto** todo extremo del Pliego, las Bases o Informe Técnico que se opongan a las precedentes disposiciones.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 6

Respecto al “certificado de examen médico ocupacional requerido para el personal”

La empresa participante PROTECCION Y RESGUARDO S.A, cuestionó la absolución de las consultas y observaciones N° 42 y N° 72, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamientos lo siguiente:

“(…)

*En los argumentos de la **consulta 42** de la empresa GEPSI, consulta respecto a la acreditación de la aptitud física y mental según Ley 29783, **siendo la respuesta de MIGACIONES no muy clara ya que no mencionan que dicha acreditación deberá ser con el certificado EMO según Ley 29783 o si será otro tipo de certificado el requerido y aceptado para acreditar la aptitud del trabajador.***

*Asimismo, la absolución a la **consulta 72**, dice que personal que utiliza lentes no podrá trabajar como vigilante al aceptar únicamente certificados con resultado APTO, **dejando de lado los APTO CON RESTRUCCION. lo cual vulnera el derecho al trabajo de personas con lentes aptas para ejercer el cargo de vigilante.**”[Sic] (el subrayado y resaltado es agregado)*

Pronunciamiento

Al respecto, de la revisión del literal j) del numeral 2.3 “requisitos para perfeccionar el contrato” previsto en el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases administrativas, precisaron requerir para el personal, entre otros aspectos lo siguiente: *“Certificados médicos de salud que acredite capacidad física y psicológica, con una antigüedad no mayor de tres (03) meses, computado desde la presentación de la documentación para la suscripción del contrato. Se podrá acreditar la capacidad física y psicológica con Certificado médico de salud expedido por un establecimiento del MINSA o ESSALUD o con Certificado médico de salud expedido por instituciones privadas con autorización de funcionamiento del Ministerio de Salud”.*

En esa línea, considerando los aspectos cuestionados por el recurrente, se efectuará el análisis bajo los siguientes extremos:

a) Respecto a la consulta u observación N° 42:

Sobre el particular, mediante consulta u observación N° 42, respecto a la capacidad física y mental del trabajador, se solicitó modificar el requerimiento o permitir que en su reemplazo se pueda acreditar también la aptitud física y mental con el certificado EMO, pues argumenta que resultaría contrario a la norma exigir documentos adicionales y diferentes que acrediten lo mismo (aptitud física y mental) según su vigencia legal; ante lo cual, el comité de selección señaló que, el participante deberá acreditar su condición física y mental del personal, independientemente del tipo de examen médico, y que debería ceñirse a lo solicitado en los términos de referencia.

En vista de ello, el recurrente en su solicitud de elevación, cuestionó la absolución brindada por el comité de selección, aludiendo que no se habría respondido con claridad si el documento que acreditará la aptitud física y mental del trabajador, deberá ser el certificado médico ocupacional u otro tipo de certificado.

Es así que, mediante el INFORME N° 001104-2023-UCP-MIGRACIONES²⁸, el área usuaria de la Entidad señaló lo siguiente:

“(…)

Se mantiene el requerimiento de certificados médicos de salud.

• *La necesidad de contar con certificados médicos de salud que acredite capacidad física y psicológica es para garantizar el cumplimiento certificado de la aptitud física del personal que realizara actividad de vigilancia en horarios diarios de 6 días a la semana en turnos de 12 horas, así como la aptitud mental para garantizar las facultades de pensamiento ante la diaria necesidad de interactuar ante usuarios y servidores de la entidad.*

• *Se precisa que el certificado médico de salud debe cumplir con informar la capacidad física y psicológica, por consiguiente, el tipo de certificado médico de salud puede ser de cualquier denominación siempre que informe la capacidad física y psicológica.*

• *En consecuencia, se precisa que el certificado EMO será aceptado siempre que informe la capacidad física y psicológica.*”

Ahora bien en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, mediante Informe Técnico posterior, la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades²⁹, aclaró que, el certificado médico de salud debe cumplir con informar la capacidad física y psicológica: siendo que, el tipo de certificado médico de salud podría ser de cualquier denominación, siempre que informe la capacidad física y psicológica. Asimismo, habría aclarado que, el certificado EMO sería aceptado siempre que informe la capacidad física y psicológica del trabajador.”

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que, la Entidad aclare cuál es el documento que acreditará la aptitud física y mental del trabajador y; en la medida que, mediante informe posterior la Entidad;

²⁸ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-25006275-LIMA., en fecha 16 de agosto de 2023.

²⁹ Ver la Opinión N.º 002-2020/DTN, entre otras, así como lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento.

aclaró la absolución ofrecida, según lo expuesto precedentemente³⁰; este Organismo Técnico Especializado ha decidió **ACOGER** el presente cuestionamiento; por lo que, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- Se **deberá tener en cuenta**³¹ como ampliación de lo absuelto en la consulta u observación N° 42, que, “el certificado médico de salud debe cumplir con informar la capacidad física y psicológica: siendo que, el tipo de certificado médico de salud podría ser de cualquier denominación, siempre que informe la capacidad física y psicológica. Asimismo, habría aclarado que, el certificado EMO sería aceptado siempre que informe la capacidad física y psicológica del trabajador.”
- Corresponderá al Titular de la Entidad **implementar** las directrices pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin de que el comité de selección cumpla con absolver de forma clara y precisa las peticiones formuladas por los participantes en sus consultas y/u observaciones, permitiendo que reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos.
- Se **dejará sin efecto** todo extremo del Pliego, las Bases o Informe Técnico que se opongan a las precedentes disposiciones.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

b) Respecto a la consulta u observación N° 72

Sobre el particular, mediante consulta u observación N° 72, se consultó si el resultado de buena salud física y mental podría salir con restricción, argumentando que, en el caso las licencias de conducir emitidas por el MTC, este emitiría las licencias con restricción (Por ejemplo, manejar con lentes); ante lo cual, el comité de selección señaló que, solo se considerará los “aptos”, sin ninguna restricción.

En vista de ello, el recurrente en su solicitud de elevación, cuestionó la absolución brindada por el comité de selección, aludiendo que, al aceptar solo certificados con el resultado de “aptos”, estaría vulnerando el derecho al trabajo de aquellas personas con lentes que contarían con el certificado de resultado “aptos con restricción”, para ejercer el cargo de vigilante.

³⁰ Ver la Opinión N.º 002-2020/DTN, entre otras, así como lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento.

³¹ Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases.

Es así que, mediante el INFORME N° 001104-2023-UCP-MIGRACIONES³², el área usuaria de la Entidad señaló lo siguiente:

“(…)
Se precisa que, el personal de seguridad debe presentar su certificado médico de salud con la condición de apto para la capacidad física y psicológica, siendo la única restricción física aceptada el que deba usar lentes de medida.”

Ahora bien, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades³³, mediante el citado informe posterior habría modificado lo absuelto en la consulta u observación en cuestión, indicando que requerirá la acreditación de la capacidad física y mental del personal considerando la indicación de “apto” en su certificado médico de salud, siendo la única restricción física aceptada, la del personal que utilice lentes de medida.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que, la Entidad acepte el certificado médico de salud de “aptos con restricción” para el personal que utilice lentes y; en la medida que, mediante informe posterior la Entidad aceptó lo solicitado, según lo expuesto precedentemente³⁴; este Organismo Técnico Especializado ha decidió **ACOGER** el presente cuestionamiento; por lo que, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- Se **deberá tener en cuenta**³⁵ como ampliación de lo absuelto en la consulta u observación N° 72, lo citado del INFORME N° 001104-2023-UCP-MIGRACIONES, de fecha 16 de agosto de 2023.
- Corresponderá al Titular de la Entidad **implementar** las directrices pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin de que el comité de selección cumpla con absolver de forma clara y precisa las peticiones formuladas por los participantes en sus consultas y/u observaciones, permitiendo que reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos.
- Se **dejará sin efecto** todo extremo del Pliego, las Bases o Informe Técnico que se opongan a las precedentes disposiciones.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la

³² Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-25006275-LIMA., en fecha 16 de agosto de 2023.

³³ Ver la Opinión N.º 002-2020/DTN, entre otras, así como lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento.

³⁴ Cabe agregar que, el OSCE no tiene calidad de perito técnico dirimente respecto a la pertinencia de las características técnicas del requerimiento; sin embargo, puede requerir a la Entidad informes que contengan la posición técnica al respecto, conforme al Comunicado N°011-2013-OSCE/PRE.

³⁵ Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases.

emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 7

Respecto a la “experiencia requerida para el personal de seguridad y vigilancia”

La empresa participante **PROTECCION Y RESGUARDO S.A**, cuestionó la absolución de las consultas y observaciones N° 44 y N° 45, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamientos lo siguiente:

“(…)

*En los argumentos de la **consulta 44** de la empresa GEPSI, consulta respecto a la acreditación de la experiencia de los vigilantes y que su certificado de trabajo deberá ser emitido según su planilla electrónica T-REGISTRO SUNAT, **a lo que MIGRACIONES no responde la consulta, limitándose a indicar que las empresas deberán ceñirse a las bases.***

Resulta importante indicar que respecto de la obligación del empleador de emitir el certificado de trabajo a favor del trabajador, es preciso revisar la Tercera Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR.

"Tercera. — Extinguido el contrato de trabajo, el trabajador recibirá del empleador, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, un certificado en el que se indique, entre otros aspectos, su tiempo de servicios y la naturaleza de las labores desempeñadas. A solicitud del trabajador se indicará la apreciación de su conducta o rendimiento".

*En el caso de los consorcios con contabilidad independiente que suscriban contratos laborales y que, en consecuencia, lleven su propia planilla, estos últimos se encuentran obligados a emitir el certificado de trabajo a favor del trabajador, en su calidad de empleadores, así como todos los otros documentos que las normas de las materias involucradas exigen, tal y como la constancia de baja SUNAT, la carta de liberación de CTS, entre otros. **En ese sentido, si un trabajador del consorcio presenta ante una Entidad pública un contrato de trabajo emitido por una empresa/persona jurídica/o cualquier otro ente colectivo diferente a la de su empleador, incluso cuando esta sea uno de las empresas socias o consorciadas, se constituye en un documento con información inexacta.***

“(…)

*Ahora en la **consulta 45** referido a la experiencia del trabajador, tampoco existe una respuesta clara por parte de MIGRACIONES ya que a nuestro entender legal, la constancia de trabajo debería ser emitido únicamente por el empleador del vigilante quien lo mantuvo en su planilla electrónica, siendo suscrito el certificado de trabajo por la persona autorizada para efectuar dicha labor con representación legal.*

Ahora siendo el certificado de trabajo emitido por el empleador según su planilla electrónica T-REGISTRO SUNAT y siendo según el OSCE el trabajo del vigilante una actividad regulada por la cual se ha sancionado a varias empresas de seguridad cuando su certificado de trabajo de su vigilante no coincide en todos sus extremos con el registro de carnet SUCAMEC; se debe considerar que para la empresa que recibe o contrato un vigilante con experiencia que proviene de otras empresas de seguridad, sería imposible hacer valer cualquier experiencia con la presentación del certificado de trabajo ya que se expondría a una sanción o inhabilitación al no coincidir el tiempo detallado en el certificado de trabajo con el registro SUCAMEC en todos sus extremos; es decir, que no coincidan las fechas de inicio y/o fin.

*Ante esta situación se debe considerar además que cuando una empresa contrata a un vigilante y los pone a laborar principalmente en entidades del estado donde otorgan plazos de 30 o 60 días para tramitar y presentar el carnet SUCAMEC o en los casos que SUCAMEC demora en la emisión del carnet, se genera un desfase entre su experiencia real según su planilla detallada en el Certificado de Trabajo y su Registro SUCAMEC y ante ello sería injusto sancionar a la empresa o se le impida brindar un puesto laboral a un vigilante que válidamente labora para una empresa de seguridad pero por diferentes motivos su anterior empleador no le tramitó a tiempo su carnet SUCAMEC.
(...)” (El subrayado y resaltado es agregado).*

Pronunciamiento

En principio, resulta pertinente aclarar que los pronunciamientos emitidos por esta Dirección, son el resultado de una acción de supervisión de parte respecto de los cuestionamientos al pliego absolutorio de un determinado procedimiento de selección, siendo que cada pronunciamiento es independiente de los demás y no resulta vinculante para otros supuestos; asimismo, corresponde acotar que las disposiciones consignadas en los pronunciamientos se realizan en función al análisis integral de la información proporcionada por las Entidades, con ocasión del trámite de solicitud de elevación, razón por la cual no resultaría factible pretender vincular situaciones que, aunque parezcan devenir de actuaciones similares, responderían a un análisis y a supuestos distintos.

Ahora bien, de la revisión del acápite 5.1.3 “perfil del personal”, contenido en el numeral 3.1 “términos de referencia” de las Bases de la convocatoria, se dispuso lo siguiente:

- Supervisor de seguridad - Personal clave
- Jefe de grupo - Personal no clave
- Agente de Seguridad - Personal no clave

Para el citado personal se estableció la forma de acreditación de su experiencia, mediante lo siguiente: “(...) *acreditará con copia de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto*”.

Por su parte, de la revisión del literal B.3, contenido en el numeral 3.2 “requisitos de calificación” de las Bases de la convocatoria, se dispuso como forma de acreditación de la experiencia para el personal clave supervisor de seguridad, lo siguiente: “*la experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.*”

Ahora bien, considerando los aspectos cuestionados por el recurrente, se efectuará el análisis bajo los siguientes extremos:

a) Respecto a la consulta u observación N° 44

Sobre el particular, mediante la consulta u observación N° 44 se solicitó, respecto a la acreditación de la experiencia del personal ofertado y de firma de contrato, confirmar si la experiencia del personal ofertado, de firma de contrato y de ejecución debería ser emitida únicamente por el empleador del vigilante y según el tiempo que se respalda con su T-REGISTRO SUNAT, argumentando que existirían empresas que fabrican constancias de trabajo para hacer cumplir el perfil a sus trabajadores: ante lo cual, el comité de selección señaló que, el participante debería ceñirse a los términos de referencia, para todo el personal solicitado en los términos de referencia (supervisor, jefe de grupo y agentes de seguridad).

En vista de ello, el recurrente en su solicitud de elevación, cuestionó que la Entidad no habría respondido a la consulta u observación en cuestión, limitándose a indicar que las empresas deben ceñirse a las bases, asimismo, precisó que si un trabajador del consorcio presenta ante una Entidad pública un contrato de trabajo emitido por una empresa/persona jurídica/o cualquier otro ente colectivo diferente a la de su empleador, incluso cuando esta sea uno de las empresas socias o consorciadas, se constituye en un documento con información inexacta.

Es así que, mediante el INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES³⁶, el área usuaria de la Entidad señaló lo siguiente:

“Consulta N° 44 (...)

Precisión técnica y motivada: Nuestra posición es con finalidad de homogenizar el requerimiento con las Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de servicios de vigilancia privada respecto a la Acreditación indicada en el B.3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE del REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

Por consiguiente, se promueve el principio de libertad de concurrencia y el principio de Igualdad de trato establecido en el Artículo 2 de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.”(el subrayado y resaltado es agregado)

Al respecto, cabe indicar que, a efectos de que las Entidades elaboren los documentos que establecen las reglas del procedimiento de selección, este Organismo Técnico Especializado aprobó la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD que contiene los documentos estándar de uso obligatorio. Entre estos documentos se encuentran las “Bases Estándar” en cuya sección específica se ha previsto los requisitos de calificación que las Entidades de acuerdo al objeto de la contratación pueden establecer.

Así, para la contratación de bienes y servicios en general las Bases Estándar han previsto que, la calificación de la experiencia del personal clave propuesto se realiza en función al tiempo de experiencia requerido en las Bases y solo puede acreditarse a través de la presentación de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o, (iv) **cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto;** los cuales deben permitir

³⁶ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

conocer la experiencia realmente adquirida por una persona en un periodo de tiempo determinado; **asimismo el contenido de dicha documentación debe incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento.**

Por su parte, cabe señalar que la Dirección Técnica Normativa del OSCE, mediante la Opinión N° 042-2022/DTN, ha señalado lo siguiente:

Sobre el particular, respecto de la fiscalización posterior que se realiza en los procedimientos de selección encauzados a través de la normativa de Contrataciones del Estado, corresponde mencionar que el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento, establece lo siguiente:

*“(…) consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de la Entidad al que se le haya asignado tal función realiza **la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.** En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, **la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación,** de conformidad con lo establecido en la Ley y el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente”. (El resaltado es agregado)*

*Como se aprecia, del dispositivo citado se desprende que, una vez consentida la buena pro, la Entidad a través del órgano competente realiza la verificación de la oferta presentada por el postor adjudicatario, con la finalidad de determinar que no se ha transgredido el principio de presunción de veracidad. Siendo así, **se desprende que, en todo procedimiento de selección, toda la documentación que conforma la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro debe ser sometida a la referida verificación**”.*

Adicionalmente, cabe señalar que, mediante la Opinión N° 105-2015/DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE, indicó lo siguiente:

*“(…) De esta manera, si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quién debería emitir la documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideración que **los documentos que la acreditan deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia,** pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida.*

*En consecuencia, los certificados de trabajo presentados para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto **deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello)** para los que se ejecutaron los trabajos que le otorgaron la experiencia que se busca acreditar.”*

Ahora bien, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que la Entidad mediante su informe técnico solo se limitó a precisar que su posición con ocasión al pliego absolutorio fue con la finalidad de homogenizar el requerimiento con lo establecido en el numeral B.3 “Experiencia del Personal Clave”, alegando que con ello se promovía el principio de libertad de concurrencia.

No obstante, se advierte que el cuestionamiento del recurrente estaría orientado a observar que no se habría respondido lo consultado por el participante; esto es, a confirmar si la experiencia del personal ofertado, de firma de contrato y de ejecución debería ser emitida únicamente por el empleador del vigilante y según el tiempo que se respalda con su T-REGISTRO SUNAT.

En esa línea, la normativa de contrataciones del Estado ha establecido la documentación necesaria para la acreditación del requisito de calificación experiencia del personal clave requerido por la entidad, la cual sería “(...) acreditará con copia de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto”, lo cual habría sido extendido al personal “no clave” en los términos de referencia.

Además, conforme a los lineamientos establecidos en las bases estándar el contenido de dicha documentación debería de incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento; siendo que respecto a los documentos de acreditación para el personal no clave, la cual se acreditaría para la suscripción del contrato, aplicarían los mismos lineamientos de acreditación de experiencia del personal clave, dado que, la Entidad habría consignado la misma forma de acreditación del personal clave.

Además, conforme a lo previsto en la citada Opinión N° 105-2015/DTN, establece que, los documentos que acrediten el personal propuesto deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida. En consecuencia, los certificados de trabajo presentados para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello) para los que se ejecutaron los trabajos que le otorgaron la experiencia que se busca acreditar.

Sin perjuicio de ello y en atención a la Opinión N° 042-2022/DTN, la Entidad podrá hacer la fiscalización posterior de las declaraciones, información o documentación que forman parte de la propuesta presentada por el postor ganador de la buena pro, y que en caso de encontrar que dicha documentación es falsa o

inexacta, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, **dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación**. Es decir, dicha verificación posterior puede ser realizada luego de haberse otorgado la buena pro o de haberse perfeccionado el contrato, y de acuerdo a la oportunidad en que se realizó, se procedería a declarar la nulidad que corresponda.

En ese sentido, considerando el análisis previamente citado, y en tanto la pretensión del recurrente se encontraría orientada a que se responda lo consultado por el participante en la consulta u observación en cuestión; y en tanto se ha aclarado el contenido de dichos certificados conforme a las Bases Estándar aplicables al objeto de la contratación, este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER PARCIALMENTE** el presente cuestionamiento, por lo que, se implementarán las disposiciones siguientes:

- Se **deberá tener en cuenta**³⁷ como ampliación de lo absuelto en la consulta u observación N° 44, lo siguiente:

La normativa de contrataciones del Estado ha establecido la documentación necesaria para la acreditación del requisito de calificación experiencia del personal clave requerido por la entidad, la cual sería “(...) *acreditará con copia de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto*”, lo cual habría sido extendido al personal no clave en los términos de referencia.

Además, conforme a los lineamientos establecidos en las bases estándar el contenido de dicha documentación debería de incluir los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

La Opinión N° 042-2022/DTN, establece que, la Entidad podrá hacer la fiscalización posterior de las declaraciones, información o documentación que forman parte de la propuesta presentada por el postor ganador de la buena pro, y que en caso de encontrar que dicha documentación es falsa o inexacta, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, **dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación**. Es decir, dicha verificación posterior puede ser realizada luego de haberse otorgado la buena pro o de haberse perfeccionado el contrato, y de acuerdo a la oportunidad en que se realizó, se procedería a declarar la nulidad que corresponda.

La Opinión N° 105-2015/DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE, indicó lo siguiente:

“(...

De esta manera, si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quién debería emitir la documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto,

³⁷ Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases.

*debe tenerse en consideración que **los documentos que la acreditan deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia**, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida.*

*En consecuencia, los certificados de trabajo presentados para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto **deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello)** para los que se ejecutaron los trabajos que le otorgaron la experiencia que se busca acreditar.”*

- Corresponderá al Titular de la Entidad **implementar** las directrices pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla con absolver de forma motivada, clara y precisa las peticiones formuladas por los participantes en sus consultas y/u observaciones, permitiendo que reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos.
- Se **deberá dejar sin efecto** toda disposición del pliego absolutorio, las Bases o informe técnico que se opongan a la presente disposición.

b) Respetto a la consulta u observación N° 45

Sobre el particular, mediante la consulta u observación N° 45, se solicitó, respecto a la acreditación de la experiencia del personal ofertado y de firma de contrato, lo siguiente:

RESPECTO A LA ACRREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL OFERTADO

¿Cuáles serán los requisitos y parámetros que deberá tener el certificado o constancia de trabajo que presenta la empresa para acreditar la experiencia de sus trabajadores?,

¿Quién puede y deberá emitir?

¿Quién es la persona autorizada de suscribir las constancias o certificados de trabajo?

¿Qué ocurrirá si un certificado de trabajo o constancia de trabajo no cumpliera con los parámetros legales requeridos y establecidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo?

Cabe precisar que existe la obligación del empleador de emitir el certificado de trabajo a favor del trabajador. Esto se sustenta en la Tercera Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR, que dice que: ¿extinguido el contrato de trabajo, el trabajador recibirá del empleador,

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, un certificado en el que se indique, entre otros aspectos, su tiempo de servicios y la naturaleza de las labores desempeñadas. A solicitud del trabajador se indicará la apreciación de su conducta o rendimiento¿. Asimismo, conforme lo dispone el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien emite la constancia o certificado de trabajo es el empleador a través de la persona a quien se le otorgo facultades para emitir y firmar los mencionados certificados.

Por lo expuesto, solicitamos a MIGRACIONES definir los parámetros que deberán cumplir la constancia o certificado mediante el cual la empresa acreditará la experiencia de sus trabajadores.

Ver el DS 001-96-TR”

Ante ello, el comité de selección señaló que, el participantes deberá ceñirse a los términos de referencia, el cual señala: “contar con experiencia laboral de cinco (5) años como Supervisor de seguridad. Se acreditará con copia de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto”.

En vista de ello, cabe señalar que, el recurrente en su solicitud de elevación, cuestionó que no existe una respuesta clara de la Entidad al absolver la consulta materia de análisis, ya que la constancia de trabajo debería ser emitida únicamente por el empleador del vigilante y suscrito el certificado de trabajo por la persona autorizada para efectuar dicha labor con representación legal.

Es así que, mediante el INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES³⁸, el área usuaria de la Entidad señaló lo siguiente:

Consulta N° 45 (...)

Precisión técnica y motivada: A fin de no vulnerar el principio de transparencia establecido en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; en su Anexo N° 2, punto I. Condiciones y Requisitos de los Procedimientos Administrativos, en el numeral c.5) señala: “Documento escaneado de la constancia o certificado de trabajo emitido por el área de recursos humanos o el que haga sus veces o funcionario competente”, o c.7) indica: otra documentación que acredite de manera fehaciente la experiencia en una entidad pública o privada, por consiguiente:

- ¿Cuáles serán los requisitos y parámetros que deberá tener el certificado o constancia de trabajo que presenta la empresa para acreditar la experiencia de sus trabajadores?

Respuesta: Los que se establece en las bases, esto es “constancia o certificado de trabajo emitido por el área de recursos humanos o el que haga sus veces o funcionario competente”.

- ¿Quién puede y deberá emitirlo?

Respuesta: Los que se establece en las bases, esto es “emitido por el área de recursos humanos o el que haga sus veces o funcionario competente”.

- ¿Quién es la persona autorizada de suscribir las constancias o certificados de trabajo?

Respuesta: Los que se establece en las bases, esto es “emitido por el área de recursos humanos o el que haga sus veces o funcionario competente”.

- ¿Qué ocurrirá si un certificado de trabajo o constancia de trabajo no cumpliera con los parámetros legales requeridos y establecidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo?

Respuesta: Si el documento no cumple los parámetros de acreditación no será considerado para efectos de la finalidad de su acreditación.

- Parámetros que deberán cumplir la constancia o certificado mediante el cual la empresa acreditará la experiencia de sus trabajadores. Ver el DS 001-96-TR.

Respuesta: Los que se establece en las bases, esto es “constancia o certificado de trabajo emitido por el área de recursos humanos o el que haga sus veces o funcionario competente”.

(el subrayado y resaltado es agregado)

Aunado a ello, atendiendo a los argumentos señalados por el recurrente y la respuesta brindada por la Entidad mediante el citado informe, corresponde desarrollar el análisis del presente cuestionamiento, de acuerdo a lo siguiente:

³⁸ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

a) Respecto a los requisitos y parámetros que deberá tener el certificado o constancia de trabajo que presenta la empresa para acreditar la experiencia de sus trabajadores. –

Al respecto, la normativa de contrataciones del Estado ha establecido la documentación necesaria para la acreditación del requisito de calificación experiencia del personal clave requerido por la entidad, la cual sería “(...) *acreditará con copia de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto*”, lo cual habría sido extendido al personal no clave en los términos de referencia de la presente contratación.

Así, es necesario indicar que, a efectos de que las Entidades elaboren los documentos que establecen las reglas del procedimiento de selección, este Organismo Técnico Especializado aprobó la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD que contiene los documentos estándar de uso obligatorio. Entre estos documentos se encuentran las “Bases Estándar” en cuya sección específica se ha previsto los requisitos de calificación que las Entidades de acuerdo al objeto de la contratación pueden establecer.

Así pues, de conformidad con las bases estándar aprobadas por el OSCE cuando las Entidades requieran calificar la experiencia del personal clave, los documentos del procedimiento de selección deberán establecer el tiempo mínimo de experiencia requerido en la ejecución de las prestaciones materia del procedimiento, el cargo o puesto que ocupará el personal clave requerido y la documentación necesaria para su acreditación de acuerdo al objeto de la contratación; en ese sentido, los precitados documentos estándar han previsto que este requisito se acredita con cualquiera de siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o, (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales deben de cumplir con los siguientes requisitos o parámetros:

- El contenido de dicha documentación debe incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.
- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

- Se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.

En atención a ello, se advierte que las bases estándar aprobadas por el OSCE establecen la documentación necesaria para la acreditación del requisito de calificación experiencia del personal clave requerido por la entidad, asimismo, determinan cuales son los parámetros y requisitos para su cumplimiento; siendo que respecto a los documentos de acreditación para el personal no clave, la cual se acreditaría para la suscripción del contrato, aplicarían los mismos lineamientos de acreditación de experiencia del personal clave, dado que, la Entidad habría consignado la misma forma de acreditación del personal clave.

b) Respecto a la persona autorizada que puede emitir y suscribir las constancias o certificados de trabajo.-

Al respecto, cabe señalar que, mediante la Opinión N° 105-2015/DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE, indicó lo siguiente:

(...)

De esta manera, si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quién debería emitir la documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideración que los documentos que la acreditan deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida.

En consecuencia, los certificados de trabajo presentados para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello) para los que se ejecutaron los trabajos que le otorgaron la experiencia que se busca acreditar."

Ahora bien, respecto de lo cuestionado por el recurrente, cabe tener en consideración lo dispuesto por la Entidad, mediante el citado informe técnico; a través del cual, señaló que el área de recursos humanos o el que haga sus veces o funcionario competente, emitirá y suscribirá las constancias o certificados de trabajo, lo cual resultaría razonable en la medida que se condice con lo dispuesto en la Opinión N° 105-2015/DTN.

c) Respecto a las consecuencias del incumplimiento de los certificados de trabajo o constancia de trabajo con los parámetros legales requeridos y establecidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.-

Al respecto, se advierte conforme al análisis de los párrafos precedentes que las Bases estándar han establecido los parámetros a cumplir en el caso de los

documentos que acrediten la experiencia del postor, los cuales para efectos de la admisión de la oferta, deben ser verificados por la Entidad de acuerdo a los lineamientos establecidos en las Bases estándar aplicables al objeto de la contratación, asimismo, siendo que respecto a los documentos de acreditación para el personal no clave, la cual se acreditaría para la suscripción del contrato, aplicarían los mismos lineamientos de acreditación de experiencia del personal clave, dado que, la Entidad habría consignado la misma forma de acreditación del personal clave.

Ahora bien, cabe señalar que la Entidad mediante su informe técnico precisó que si un documento no cumple con los parámetros establecidos de acreditación no será considerado, lo cual resultaría razonable ya que la Entidad tiene la potestad de realizar la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en la en la Opinión N° 042-2022/DTN.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encuentra orientada a cuestionar la deficiente absolución a la consulta u observación en cuestión; según lo expuesto precedentemente; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER PARCIALMENTE** el presente cuestionamiento, por lo que, se implementarán las disposiciones siguientes.

- Se **deberá tener en cuenta**³⁹ como ampliación de lo absuelto en la consulta u observación N° 45, lo siguiente:

a) Respecto a los requisitos y parámetros que deberá tener el certificado o constancia de trabajo que presenta la empresa para acreditar la experiencia de sus trabajadores. –

Las Bases estándar objeto de la presente contratación han previsto que, el requisito de calificación de experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o, (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales deben de cumplir con los siguientes requisitos o parámetros:

- El contenido de dicha documentación debe incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.
- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a

³⁹ Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases.

veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

- Se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.

Asimismo, siendo que respecto a los documentos de acreditación para el personal no clave, la cual se acreditaría para la suscripción del contrato, aplicarían los mismos lineamientos de acreditación de experiencia del personal clave, dado que, la Entidad habría consignado la misma forma de acreditación del personal clave.

b) Respecto a la persona autorizada que puede emitir y suscribir las constancias o certificados de trabajo.-

La Opinión N° 105-2015/DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE, indicó lo siguiente:

“(…)

De esta manera, si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quién debería emitir la documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideración que los documentos que la acreditan deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida.

En consecuencia, los certificados de trabajo presentados para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello) para los que se ejecutaron los trabajos que le otorgaron la experiencia que se busca acreditar.”

c) Respecto a las consecuencias del incumplimiento de los certificados de trabajo o constancia de trabajo con los parámetros legales requeridos y establecidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.-

Las Bases estándar han establecido los parámetros a cumplir en el caso de los documentos que acrediten la experiencia del postor, los cuales para efectos de la admisión de la oferta, deben ser verificados por la Entidad de acuerdo a los lineamientos establecidos en las Bases estándar aplicables al objeto de la contratación; asimismo, siendo que respecto a los documentos de acreditación para el personal no clave, la cual se acreditaría para la suscripción del contrato, aplicarían los mismos lineamientos de acreditación de experiencia del personal clave, dado que, la Entidad habría consignado la misma forma de acreditación del personal clave.

Ahora bien, cabe señalar que la Entidad mediante su informe técnico precisó que si un documento no cumple con los parámetros establecidos de acreditación no será considerado, lo cual resultaría razonable ya que la Entidad tiene la potestad de realizar la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en la en la Opinión N° 042-2022/DTN.

- Corresponderá al Titular de la Entidad **implementar** las directrices pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla con absolver de forma motivada, clara y precisa las peticiones formuladas por los participantes en sus consultas y/u observaciones, permitiendo que reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos.
- Se **deberá dejar sin efecto** toda disposición del pliego absolutorio, las Bases o informe técnico que se opongan a la presente disposición.

Cuestionamiento N° 8

Respecto a la “Perfil del personal clave”

La empresa participante PROTECCION Y RESGUARDO S.A, cuestionó la absolución de las consulta y observación N° 48, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamientos lo siguiente:

“(…)
En los argumentos de la consulta 48 de la empresa VICMER, consulta respecto a la acreditación de la experiencia de los supervisores en la absolución MIGRACIONES absuelve manifestando que únicamente serán aptos los supervisores con preparación de las FFAA que le otorgue según su criterio competencias de formación y experiencia que les garantiza disciplina entre otras aptitudes descritas en la absolución.

*Sobre el particular, **no se está considerando y aceptando personal que haya pertenecido a la PNP o personal civil con experiencia lo cual vulnera la normativa vigente de contrataciones con el estado y el derecho al trabajo de personal que perfectamente puede desarrollar las labores iguales o superiores a una persona egresada de las FFAA.***

*Por lo expuesto elevamos la absolución **a fin que se permita la participación de personal que perteneció a la PNP y/o supervisores Civil con formación técnica o profesional con experiencia en el cargo de Supervisor.***” (El subrayado y resaltado es agregado).

Pronunciamiento

Al respecto, es oportuno señalar que las Bases Estándar objeto la presente contratación, establecen que, al definir el plantel, la Entidad no debe restringir la posibilidad de contar con personal de procedencia civil o personal en retiro de las fuerzas armadas o policiales, congruente con lo dispuesto en el literal g) del artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1213.

Ahora bien, de la revisión del requerimiento contenido en Bases de la convocatoria, se aprecia que la Entidad requirió, entre otros, como perfil del personal clave - supervisor

de seguridad, “*Ser Licenciado de las FF.AA. siempre que no haya sido dado de Baja por medida disciplinaria o sentencia judicial condenatoria por delito doloso*”.

En relación a ello, a través de la consulta u observación N° 48, el participante GRUPO VICMER SECURITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, consultó si se podría considerar como perfil del personal “supervisor de seguridad” a las personas civiles o necesariamente tienen que ser licenciados de las FF.AA.

Ante lo cual el comité de selección decidió no acoger la observación, precisando que de acuerdo a las funciones del cargo del Supervisor de Seguridad, la cantidad de sedes a monitorear en temas de seguridad y vigilancia (8 sedes), y la cantidad de personal a cargo en las distintas sedes, hacen que se requiera que el personal Supervisor cuente con preparación de las fuerzas armadas que le otorgue competencias de formación y de experiencia que garanticen su disciplina para actuar por convicción y voluntariamente disminuyendo el riesgo inherente a sus labores, así como las competencias de liderazgo motivando el desempeño de su personal a cargo y el conocimiento metodológico para conducirse con respeto de los derechos humanos en situaciones difíciles en el contexto que MIGRACIONES cuenta con SEDES de atención al público de hasta 24 horas del día.

Es así que, mediante el INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES⁴⁰, el área usuaria de la Entidad señaló lo siguiente:

“Consulta N° 48 (...)”

Precisión técnica y motivada: Nuestra posición es con finalidad de garantizar la eficacia y eficiencia con el puesto, garantizándose un personal clave personal Supervisor de seguridad con preparación de las fuerzas armadas que le otorgue competencias de formación y de experiencia que garantiza su disciplina para actuar por convicción y voluntariamente disminuyéndose el riesgo inherente a sus labores, así como las competencias de liderazgo motivando el desempeño de su personal a cargo y el conocimiento metodológico para conducirse con respeto de los derechos humanos en situaciones difíciles en el contexto que MIGRACIONES cuenta con SEDES de atención al público de hasta 24 horas del día. A fin de no vulnerar el principio de Eficacia y Eficiencia establecido en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.” (el subrayado y resaltado es agregado)

Ahora bien, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que, la Entidad, mediante su informe técnico, precisó, que su postura es con la finalidad de garantizar la eficacia y eficiencia para el puesto de supervisor de seguridad, acotando que su preparación en las fuerzas armadas le otorga, entre otros, competencias de formación y de experiencia que garantiza su disciplina para actuar por convicción y disminuir el riesgo inherente a sus labores.

De lo expuesto se advierte que la Entidad consideró como personal supervisor de seguridad solo a los licenciados de las fuerzas armadas, no obstante, es menester precisar que, dicho aspecto no se condice con lo establecido en las Bases estándar aplicables al objeto de contratación, así como lo señalado en el literal g) del artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1213, ya que no se puede restringir la posibilidad de contar

⁴⁰ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

con personal de procedencia civil o personal en retiro de las fuerzas armadas o policiales.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría orientada a que se permita la participación de personal que perteneció a la PNP y/o supervisores Civiles con formación técnica o profesional con experiencia en el cargo de Supervisor; y en vista que se ha evidenciado que el requerimiento del perfil del supervisor de seguridad no guardaría congruencia con lo establecido en las Bases Estándar aplicables, según lo expuesto precedentemente, este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER** el presente cuestionamiento; por lo tanto, se implementarán las siguientes disposiciones:

- Se **dejará sin efecto** la absolución de la consulta u observación N° 48.
- Se **adecuará** en el acápite 5.1.2 del numeral 3.1 “términos de referencia” de las Bases integradas definitivas, lo siguiente:

“(…)
- Ser Licenciado de las FF.AA *en retiro o personal policial en retiro*, siempre que no haya sido dado de Baja por medida disciplinaria o sentencia judicial condenatoria por delito doloso. *O personal de procedencia civil*”

- Corresponderá al Titular de la Entidad **implementar** las directrices pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla con absolver de forma clara y precisa las peticiones formuladas por los participantes en sus consultas y/u observaciones, permitiendo que reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos.
- Se **dejará sin efecto** todo extremo del Pliego, las Bases o Informe Técnico que se opongan a las precedentes disposiciones.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO

Si bien el procedimiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre los supuestos cuestionamientos derivados de la absolución de consultas y/u observaciones, y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle:

3.1 Otras penalidades

De la revisión del acápite 12.1 “penalidades” consignado en el numeral 3.1 “términos de referencia” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:

“12.1 Otras penalidades (...)				
20	CUANDO EL PERSONAL AGENTE DE SEGURIDAD POR SU ACTITUD O NEGLIGENCIA AFECTE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD.	POR CADA OCURRENCIA POR AGENTE	5% DE UIT	SE REALIZARÁ TENIENDO EN CUENTA EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES
(...)”				

En relación con ello, es pertinente precisar que, el artículo 163° del Reglamento, establece que, los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Es así que de la revisión de la penalidad N° 20, se advierte que el término “actitud o negligencia”, resultaría subjetivo al momento de aplicar la penalidad, puesto que no se habría precisado el alcance de dicho término.

En razón a ello, mediante el INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES⁴¹ de fecha 31 de julio de 2023, la Entidad precisó lo siguiente:

<p>“Alcance del extremo “actitud o negligencia”</p> <p><i>Nuestra posición es con finalidad de garantizar la eficacia y eficiencia con el puesto garantizándose un personal de seguridad con respuesta acorde al cumplimiento de sus funciones que proteja la imagen de la entidad (MIGRACIONES) por lo que se precisa el alcance del extremo siguiente “actitud o negligencia”.</i></p> <p>(...)</p> <p><i>La actitud penalizable es la que corresponda a un ánimo “amenazador” de maltrato (daño moral o físico) o la falta de respeto (burlar o humillar) a usuarios, servidores o proveedores de la Entidad.</i></p> <p><i>La negligencia penalizable es la de cualquier descuido que atente contra las funciones generales del puesto de seguridad.”</i></p>
--

Por lo tanto, considerando lo declarado por la Entidad, respecto a los términos “actitud o negligencia” del supuesto de la penalidad N.º 20, corresponde adecuar la misma.

En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de Bases, se implementarán las disposiciones siguientes:

⁴¹ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

- Se **adecuará** en el acápite 12.1 del numeral 3.1 “términos de referencia” de las Bases integradas definitivas, lo siguiente:

“12.1 Otras penalidades (...)”				
20	<p>CUANDO EL PERSONAL AGENTE DE SEGURIDAD POR SU ACTITUD O NEGLIGENCIA AFECTE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD.</p> <p><i>La actitud penalizable es la que corresponda a un ánimo “amenazador” de maltrato (daño moral o físico) o la falta de respeto (burlar o humillar) a usuarios, servidores o proveedores de la Entidad.</i></p> <p><i>La negligencia penalizable es la de cualquier descuido que atente contra las funciones generales del puesto de seguridad.</i></p>	POR CADA OCURRENCIA POR AGENTE	5% DE UIT	SE REALIZARÁ TENIENDO EN CUENTA EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES
(“...”)”				

- Se **dejará sin efecto** todo extremo del Pliego, las Bases o Informe Técnico que se opongan a las precedentes disposiciones.

3.2 Deficiente absolución de las consultas y observaciones N° 24 y N° 59

De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

Consulta u observación N° 24	Análisis respecto de la consulta u observación:
<p>“CAMBIOS DE PERSONAL Consultamos: <u>Qué documentos serán suficientes para acreditar ante vuestra institución los cambios por casos fortuitos o fuerza mayor</u>, ya que según lo prescribe el Artículo N°1315 del Código Civil, que señala: ‘Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso’ Consultamos: <u>Con que documentos el contratista podrá acreditar los cambios de personal por las situaciones expuestas</u>, teniendo situaciones como por ejemplo los casos de abandonos de puesto, accidentes, malestares que no implican ir a una posta o hospital o viajes inesperados del trabajador por problemas familiares. Consultamos: <u>Tendrá validez tal vez una declaración jurada justificando la falta</u> Consultamos: <u>Cuál será el máximo de cambios a realizarse por mes por situación fortuita o fuerza</u></p>	<p>Al respecto se indica: - La administración de personal corresponde al contratista, la entidad contrata el servicio. - No hay un numero máximo de cambios. Todo cambio debe cumplir los requisitos y comunicar a la entidad. Tal como lo señala el término de referencia: c) El nuevo personal que sea destacado a MIGRACIONES debe de contar con similares o superiores características de lo requerido. El Contratista tiene que comunicar del cambio con un plazo mínimo de un (1) día a la presentación el cual será aprobado en un plazo máximo de un (1) día, a fin de que el nuevo personal se presente a MIGRACIONES. Por lo tanto, se deberá ceñir a lo señalado en los</p>

<p><u>mayor</u>, considerando que en algunas empresas suceden cambios constantes por falta de pago a sus trabajadores y ello no puede ser justificado como caso fortuito o fuerza mayor.</p> <p>Consultamos: <u>Qué ocurrirá si la empresa no respeta los límites máximos de cambios permitidos y usa la justificación de la situación fortuita para reemplazar al 100% de su personal ofertado en su firma de contrato al momento de instalar sus servicios.</u>”</p>	<p>términos de referencia.”</p>
<p>Consulta u observación N° 59</p> <p>“La entidad <u>podría aclarar cuales son las facultades que deben estar expresamente contenidas en la vigencia de poder para la firma de contrato?</u>”</p>	<p>Análisis respecto de la consulta u observación:</p> <p>“La vigencia poder, debe acreditar la representación del que suscriba la oferta.”</p>

De lo expuesto, se advierte que la Entidad no habría absuelto de manera clara y motivada todas las solicitudes formuladas por los participantes en las consultas y observaciones N° 24 y N° 59, con ocasión al pliego absolutorio.

En razón a ello, mediante el INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES⁴², la Entidad precisó lo siguiente:

<p>“Consulta N° 24:</p> <p>(...)</p> <p><u>Precisión clara y motivada:</u></p> <p>a) Respecto a <u>Qué documentos serán suficientes para acreditar ante vuestra institución los cambios, se precisa que, las coordinaciones de caso fortuito se dan entre el supervisor de seguridad de la CONTRATISTA y el personal a cargo de la supervisión del servicio de MIGRACIONES, así también los documentos suficientes para acreditar ante vuestra institución los cambios por casos fortuitos o fuerza mayor, son una carta comunicativa al área usuaria.</u></p> <p>b) Respecto a <u>qué documentos el contratista podrá acreditar los cambios de personal se precisa que, Los documentos suficientes para acreditar ante vuestra institución los cambios por casos fortuitos o fuerza mayor, son una carta comunicativa al área usuaria.</u></p> <p>c) Respecto a <u>qué si tendrá validez tal vez una declaración jurada para justificar una falta se precisa que, Las faltas de justificación es en la relación del personal de la Contratista y la Contratista, no corresponde a la Entidad atender justificaciones por falta.</u></p> <p>d) No existe límite máximo de cambios permitidos, considerando que los cambios son con personal con legajos AUTORIZADOS.</p> <p>A fin de no vulnerar el principio de transparencia establecido en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO”.</p>
--

Aunado a ello, mediante CARTA N° 004-2023-CS⁴³, la Entidad precisó lo siguiente:

<p>“Ahora bien, respecto a las consulta N° 59 este comité señala que:</p> <p>(...)</p>
--

⁴² Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

⁴³ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

La vigencia poder, contiene las características, límites y extensión de las facultades conferidas al apoderado, a efectos de establecer las actuaciones que éste puede realizar a nombre de su representado. En esa medida, las facultades de representación deben desprenderse indubitadamente del propio contenido y sentido del poder, esto sin llegar a la necesidad de exigir precisiones excesivamente puntuales o detalladas. Por lo tanto, en caso el postor adjudicado actúe a través de representante legal, apoderado o mandatario, la entidad revisará de manera integral los alcances de la vigencia de poder presentada, a efectos de determinar que dicha persona cuenta con las facultades de representación suficientes para suscribir el contrato”.

Como se aprecia, la Entidad mediante los citados documentos, habría brindado mayores alcances respecto a la absolución de las consultas en las consultas y observaciones N° 24 y N° 59 formuladas por los participantes con ocasión al pliego absolutorio.

En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de Bases, se implementarán las disposiciones siguientes:

- Se **deberá tener en cuenta**⁴⁴ como ampliación de lo absuelto en la consulta u observación N° 24, lo citado del INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES.
- Se **deberá tener en cuenta**⁴⁵ como ampliación de lo absuelto en la consulta u observación N° 59, lo citado de la CARTA N° 004-2023-CS.

3.3 Deficiente absolución de la consulta y observación N° 107

De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

Consulta u observación N° 107	Análisis respecto de la consulta u observación:
<p><i>“La capacitaciones del personal de (supervisores/jefes de grupo/ agentes de seguridad) que se refiere a combate contra incendios y primeros auxilios básicos: <u>¿Por quién deben ser dictadas CADA UNA de estas capacitaciones?</u> <u>¿En que caso, pueden ser la empresa de seguridad conjuntamente con un instructor debidamente acreditado por la SUCAMEC?</u> <u>¿En que casos debe ser una institución pública o privada?</u> <u>¿Con cuánto tiempo de antigüedad deben ser emitidos como maximo?</u> <u>¿Pueden ser emitidos con firma digital?</u> <u>¿De cuántas horas lectivas deben ser CADA UNA de esta capacitaciones?</u> <u>¿Deben acreditarse todas y cada una de ellas o se podrá acreditar solo una de ellas?”</u></i></p>	<p><i>“De acuerdo a lo revisado se aclara que, en el numeral 5.1.3 señala: "Capacitación por un mínimo de 12 horas en combate contra incendio y primeros auxilios básicos. Acreditado con copia del certificado y/o constancia puede ser emitido por entidad público y/o privado o la misma empresa." Asimismo, en el numeral 6, ítem j) del termino de referencia señala: "... con una antigüedad no mayor de tres (03) meses, computado desde la presentación de la documentación para la suscripción del contrato.". Por consiguiente deberá ceñirse a los términos de referencia.”</i></p>

De lo expuesto, se advierte que la Entidad no habría absuelto de manera clara y

⁴⁴ Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases.

⁴⁵ Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases.

motivada todas las consultas formuladas por los participantes con ocasión al pliego absolutorio.

En razón a ello, mediante el INFORME N° 001033-2023-UCP-MIGRACIONES⁴⁶ de fecha 31 de julio de 2023, remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 26 de julio de 2023, la Entidad precisó lo siguiente:

“Consulta N° 107:

(...)

Precisión clara y motivada:

A fin de no vulnerar el principio de Eficacia y Eficiencia establecido en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, en su artículo 37- Instituciones facultadas para capacitar, señala:

“37.1. Las actividades de formación básica, perfeccionamiento o especialización son realizadas por:

A. Centros de formación y especialización en seguridad privada (CEFOESP) constituidos por personas jurídicas autorizadas por SUCAMEC.

B. Departamentos de capacitación de las empresas de servicios de seguridad privada.

C. Universidades o institutos superiores, públicos o privados.

37.2. Las instituciones señaladas en los literales a) y b), deben estar registradas y autorizadas por la SUCAMEC.

37.3. La SUCAMEC puede realizar actividades de difusión y capacitación de la normativa en materia de su competencia.

37.4. La SUCAMEC puede implementar una plataforma virtual de capacitación complementaria para el personal de seguridad en sus distintas modalidades, que se regula a través de directivas.

37.5. Las instituciones señaladas en los literales a) y b), se encuentran sujetas a fiscalización y a la potestad sancionadora de la SUCAMEC.

De acuerdo a lo señalado, en el numeral 5.1.3. Perfil del personal: Capacitación por un mínimo de 12 horas en combate contra incendio y primeros auxilios básicos. Acreditado con copia del certificado y/o constancia puede ser emitido por entidad público y/o privado o la misma empresa.”

Asimismo, en el numeral 6, ítem j) del término de referencia señala: “... con una antigüedad no mayor de tres (03) meses, computado desde la presentación de la documentación para la suscripción del contrato”.

Como se aprecia, la Entidad mediante los citados documentos, habría brindado mayores alcances respecto a la absolución de las consultas formuladas por los participantes con ocasión al pliego absolutorio.

Sin embargo, adicionalmente a lo expuesto por la Entidad, corresponde señalar lo siguiente:

- a) Respecto a : ¿Por quién deben ser dictadas cada una de estas capacitaciones? y Respecto a ¿En qué casos debe ser una institución pública o privada?

Sobre el particular, la Entidad ha precisado que, en el acápite 5.1.3., se establece que la capacitación se acreditará con copia del certificado y/o constancia y que estos pueden ser emitido por entidad público y/o privado o la misma empresa.”.

Aunado a ello, cabe señalar que, el Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada”, dispone en su artículo

⁴⁶ Recepcionado mediante Trámite Documentario N° 2023-24965790-LIMA, en fecha 1 de agosto de 2023.

37, lo siguiente:

*Artículo 37.- **Instituciones facultadas para capacitar***

*37.1. Las actividades de formación básica, perfeccionamiento **o especialización** son realizadas por:*

- a) Centros de Formación y Especialización en Seguridad Privada (CEFOESP) constituidos por personas jurídicas autorizadas por SUCAMEC.*
- b) Departamentos de capacitación de las empresas de servicios de seguridad privada.*
- c) Universidades o institutos superiores, públicos o privados.*

*37.2. Las instituciones señaladas en los literales **a) y b)**, **deben estar registradas y autorizadas por la SUCAMEC.***

37.3. La SUCAMEC puede realizar actividades de difusión y capacitación de la normativa en materia de su competencia.

37.4. La SUCAMEC puede implementar una plataforma virtual de capacitación complementaria para el personal de seguridad en sus distintas modalidades, que se regula a través de directivas.

37.5. Las instituciones señaladas en los literales a) y b), se encuentran sujetas a fiscalización y a la potestad sancionadora de la SUCAMEC.

De lo expuesto, se aprecia que, en el artículo 37 del citado Decreto Legislativo N° 1213, establece las instituciones facultadas a capacitar en materia de servicios de seguridad privada.

Aunado a ello, el Decreto Supremo N° 005-2023-IN “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada”, dispone en el numeral 7.1 del artículo 71, que, “*El/la capacitador/a en seguridad privada es la persona natural que cuenta con autorización expedida por la SUCAMEC para impartir enseñanza en materia de servicios de seguridad privada.*”.

En esa línea y considerando lo precisado por la Entidad en su requerimiento, corresponde señalar que, si bien la Entidad habría señalado que las capacitaciones requeridas pueden ser emitidas por entidad público y/o privado o la misma empresa, estas deben encontrarse enmarcadas en el marco del artículo 37 del Decreto Legislativo N° 1213, para capacitar en materia de servicios de seguridad privada; asimismo, el/la capacitador/a en seguridad privada para impartir enseñanza en materia de servicios de seguridad privada deberá cumplir con lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 71 del citado Decreto Supremo N° 005-2023-IN. Por lo tanto, corresponde hacer dicha precisión en citado acápite del requerimiento.

- b) Respecto a : ¿En qué caso, pueden ser la **empresa de seguridad** conjuntamente con **un instructor** debidamente acreditado por la SUCAMEC?

- Al respecto, se aprecia que la Entidad no habría brindado mayores alcances a la consulta; sin embargo, sobre ello cabe señalar lo siguiente:

El Decreto Supremo N° 005-2023-IN “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada”, dispone en el numeral 7.1 del artículo 71, que, *“El/la capacitador/a en seguridad privada es la persona natural que cuenta con autorización expedida por la SUCAMEC para impartir enseñanza en materia de servicios de seguridad privada.”*

Aunado a ello, cabe señalar que, el Decreto Supremo N° 005-2023-IN “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada”, dispone en el numeral 7.3 del artículo 71, que, *“El proceso de acreditación de los capacitadores/as, los perfiles, los módulos de acreditación, los lineamientos, las evaluaciones para la referida acreditación son establecidos a través de Resolución de Superintendencia de la SUCAMEC..”*

Así, en la primera de las Disposiciones Complementarias Transitorias del referido Decreto Supremo N° 005-2023-IN, dispone que, en tanto se implementen los CEFOESP y los Departamentos de Capacitación de las Empresas de Servicios de Seguridad Privada, la Directiva PM02.04/GSSP/DIR/47.01 que regula las actividades de Formación Básica y Perfeccionamiento para los aspirantes y el personal de Seguridad, y establece el plan de estudios y la Directiva N° 008-2016-SUCAMEC que establece el Proceso de Selección y Acreditación de Instructores, permanecen vigentes hasta su respectiva actualización.

Por su parte, la DIRECTIVA PM02.04/GSSP/DIR/49.01, que regula las actividades de Formación Básica y Perfeccionamiento para los aspirantes y el personal de Seguridad, y establece el plan de estudios, establece lo siguiente:

“6.1. De los sujetos involucrados en la Formación Básica y Perfeccionamiento

6.1.1. Las personas jurídicas que prestan o desarrollan servicios de seguridad privada, debidamente autorizadas por la SUCAMEC, son las encargadas de programar, así como realizar las actividades de Formación Básica y Perfeccionamiento dirigidas al aspirante y personal de seguridad, siguiendo el Plan de Estudios, establecido por la presente Directiva. Para tal efecto, deben contar con las autorizaciones vigentes en el ámbito geográfico donde realicen las actividades de Formación Básica y Perfeccionamiento.

6.1.2. El instructor acreditado por la SUCAMEC es la persona natural autorizada para el dictado de los módulos, cursos y materias que conforman el Plan de Estudios de Formación Básica y Perfeccionamiento, asimismo, es el encargado de controlar la asistencia, tomar las evaluaciones y registrar la notas.”

(...)

6.3 De los módulos, cursos y materias que forman parte del Plan de Estudios de Formación Básica y Perfeccionamiento

Las personas jurídicas que prestan o desarrollan servicios de seguridad privada, el

personal de seguridad y aspirantes, así como los instructores acreditados por la SUCAMEC están obligados a cumplir, coadyuvar al cumplimiento y hacer cumplir, respectivamente, el íntegro de los módulos, cursos y materias que comprenden el Plan de Estudios de la Formación Básica y Perfeccionamiento, así como el número total de horas correspondiente a cada curso en particular.

Por otra parte, la Directiva N° 008-2016-SUCAMEC “Directiva que establece el proceso de selección y acreditación de instructores”, establece lo siguiente:

“I. OBJETO

*Establecer un sistema para la selección y acreditación de instructores, de acuerdo a los lineamientos que se formulen para tal fin, conforme a la normativa de seguridad privada. Asimismo, asegurar que los instructores acreditados se encuentren debidamente preparados para el desarrollo de los cursos que forman parte del Plan de Estudios de **Formación Básica y Perfeccionamiento** para agentes de seguridad privada.*
(...)

II. FINALIDAD

Comprobar que los instructores acreditados por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (en adelante “SUCAMEC”), tengan las aptitudes académicas, técnicas y psicológicas requeridas para el adecuado desarrollo de los cursos que forman parte del Plan de Estudios de Formación Básica y Perfeccionamiento para agentes de seguridad privada, garantizando una formación básica del personal que presta servicios de seguridad privada que les permita ejercer sus funciones de acuerdo a las exigencias del servicio, y en atención a los fines reconocidos por la normatividad nacional vigente y los estándares internacionales.
(...)

5.1. Glosario de Términos

-Instructor o capacitador acreditado: Es la persona debidamente acreditado por la SUCAMEC para desarrollar el curso de formación básica o perfeccionamiento.
(...)

6.3. Acreditación de Instructores - Vigencia

(...)

6.3.4. Los instructores tienen la facultad de brindar sus servicios a cualquiera de las empresas especializadas que prestan servicios de seguridad privada que se encuentren acreditadas por la SUCAMEC, durante la vigencia de su ficha de instructor.
(...)”

Por lo tanto, atendiendo a lo consultado por el recurrente, se desprende que, las personas jurídicas encargadas de realizar las actividades de Formación Básica y Perfeccionamiento dirigidas al aspirante y personal de seguridad, siguiendo el Plan de Estudios establecido por la Directiva PM02.04/GSSP/DIR/47.01, deberían ser llevados a cabo por el instructor acreditado por la SUCAMEC, para el dictado de los módulos, cursos y materias que conforman el Plan de Estudios de Formación Básica y Perfeccionamiento.

Asimismo, los instructores tienen la facultad de brindar sus servicios a

cualquiera de las empresas especializadas que prestan servicios de seguridad privada que se encuentren acreditadas por la SUCAMEC, durante la vigencia de su ficha de instructor.

c) Respecto a: ¿Con cuánto tiempo de antigüedad deben ser emitidos como máximo?

Sobre el particular, mediante Informe la Entidad habría reiterado que el requerimiento de las capacitaciones deben tener una antigüedad de tres (3) meses, computado desde la presentación de la documentación para la suscripción del contrato; sin embargo, ello no resultaría acorde a la normativa de contrataciones, pues esta no ha previsto una antigüedad máxima para las capacitaciones, por lo que, corresponde dejar sin efecto dicha precisión.

d) Respecto a: ¿Pueden ser emitidos con firma digital?

Al respecto dentro del marco legal vigente existe la firma digital, la cual cuenta con una regulación especial establecida en la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM.

En ese sentido, mediante la Ley N° 27269, se estableció que la autoridad administrativa competente registraría a las Entidades de Certificación Digital y a las Entidades de Registro o Verificación, las cuales deberían cumplir con los estándares técnicos internacionales vinculados a la certificación digital

Por su parte el artículo 3° del citado Reglamento establece sobre la firma digital lo siguiente:

“La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. En tal sentido, cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito se entenderá cumplido en relación con un documento electrónico si se utiliza una firma digital generada en el marco de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica. (...)”

Asimismo, el artículo 57° del citado Reglamento, establece como unas de las funciones de la Autoridad Administrativa Competente lo siguiente:

“a) Aprobar las Políticas de Certificación, de Registro o Verificación y de Valor Añadido, las Declaraciones de Prácticas de Certificación, de Registro o Verificación y de Valor Añadido, las Políticas de Seguridad y las Políticas y Planes de Privacidad de las Entidades de Certificación, de Registro o Verificación y de Valor Añadido, de los Prestadores de Servicios de Certificación tanto públicos como privados.

b) Acreditar Entidades de Certificación nacionales tanto públicas como privadas y establecer acuerdos de reconocimiento mutuo con otras Infraestructuras compatibles con la Infraestructura Oficial de Firmas Electrónicas.

c) Acreditar Entidades de Registro o de Verificación tanto públicas como privadas.

(...)”.

En tal condición, las entidades públicas y empresas tienen la facultad de utilizar la firma digital para la suscripción de documentos en el mundo virtual, atendiendo a los requisitos y condiciones dispuestos en la Ley N° 27269 y su Reglamento,

debido a que la firma digital tiene la misma validez y eficacia que la firma manuscrita.

- e) Respecto a: ¿De cuántas horas lectivas deben ser cada una de estas capacitaciones? y ¿Deben acreditarse todas y cada una de ellas o se podrá acreditar solo una de ellas?

Sobre el particular, mediante Informe la Entidad habría reiterado que el requerimiento de las capacitaciones deberían ser por un mínimo de 12 horas en “combate contra incendio y primeros auxilios básicos”.

De ello se desprende que, en las citadas capacitaciones existiría el conector (y), con lo cual, se desprendería que en el requerimiento no se habría previsto una cantidad de horas de forma independiente, sino por conjunto, esto es, 12 horas en “combate contra incendio y primeros auxilios básicos”, con lo cual, no se podría dejar de desmerecer las capacitaciones se acrediten en 12 horas en “combate contra incendio” y 12 horas en “primeros auxilios básicos”.

Por otra parte, en el requerimiento no se habría previsto si las capacitaciones serían lectivas o académicas.

En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de Bases, se implementarán las disposiciones siguientes:

- Se **deberá tener en cuenta**⁴⁷ como ampliación de lo absuelto en la consulta u observación N° 107, lo siguiente:

- a) Respecto a : ¿Por quién deben ser dictadas cada una de estas capacitaciones? y Respecto a ¿En qué casos debe ser una institución pública o privada?

En el artículo 37 del citado Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada”, establece las instituciones facultadas a capacitar en materia de servicios de seguridad privada. Asimismo, en el numeral 7.1 del artículo 71 del citado Decreto Supremo N° 005-2023-IN “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1213, establece que, *“El/la capacitador/a en seguridad privada es la persona natural que cuenta con autorización expedida por la SUCAMEC para impartir enseñanza en materia de servicios de seguridad privada.*

- b) Respecto a : ¿En qué caso, pueden ser la empresa de seguridad conjuntamente con un instructor debidamente acreditado por la SUCAMEC?

⁴⁷ Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases.

Las personas jurídicas encargadas de realizar las actividades de Formación Básica y Perfeccionamiento dirigidas al aspirante y personal de seguridad, siguiendo el Plan de Estudios establecido por la Directiva PM02.04/GSSP/DIR/47.01, deberían ser llevados a cabo por el instructor acreditado por la SUCAMEC, para el dictado de los módulos, cursos y materias que conforman el Plan de Estudios de Formación Básica y Perfeccionamiento.

Asimismo, los instructores tienen la facultad de brindar sus servicios a cualquiera de las empresas especializadas que prestan servicios de seguridad privada que se encuentren acreditadas por la SUCAMEC, durante la vigencia de su ficha de instructor.

- c) Respecto a: ¿Con cuánto tiempo de antigüedad deben ser emitidos como máximo?

La normativa de contrataciones no ha previsto una antigüedad máxima para las capacitaciones.

- d) Respecto a: ¿Pueden ser emitidos con firma digital?

Las capacitaciones pueden ser emitidas con firma digital, si la institución facultada a capacitar cuenta con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM

- e) Respecto a: ¿De cuántas horas lectivas deben ser **cada una** de estas capacitaciones? y ¿Deben acreditarse todas y cada una de ellas o se podrá acreditar solo una de ellas?

En el requerimiento no se habría previsto una cantidad de horas de forma independiente, sino por conjunto, esto es, 12 horas en “combate contra incendio y primeros auxilios básicos”, con lo cual, no se podría dejar de desmerecer las capacitaciones se acrediten en 12 horas en “combate contra incendio” y 12 horas en “primeros auxilios básicos”.

Por otra parte, en el requerimiento no se habría previsto si las capacitaciones serían lectivas o académicas.

- Se **adecuará** en el acápite 5.1.3 del numeral 3.1 “términos de referencia”, ambos, de las Bases integradas definitivas, lo siguiente:

“(…)

SUPERVISOR DE SEGURIDAD – PERSONAL CLAVE

“(…)

- *Capacitación por un mínimo de 12 horas en combate contra incendio y primeros auxilios básicos. Acreditado con copia del certificado y/o constancia puede ser emitido por entidad público y/o privado o la misma empresa.*

Las citada entidad público y/o privado o la misma empresa, deben encontrarse enmarcadas en el marco del artículo 37 del Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada”, para capacitar en materia de servicios de seguridad privada. Asimismo, el/la capacitador/a en seguridad privada para impartir enseñanza en materia de servicios de seguridad privada deberá cumplir con lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 71 del citado Decreto Supremo N° 005-2023-IN “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1213.

(...)

JEFE DE GRUPO

(...)

- Capacitación por un mínimo de 12 horas en combate contra incendio y primeros auxilios básicos. Acreditado con copia del certificado y/o constancia que puede ser emitido por institución pública y/o privada o la misma empresa.

Las citada entidad público y/o privado o la misma empresa, deben encontrarse enmarcadas en el marco del artículo 37 del Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada”, para capacitar en materia de servicios de seguridad privada. Asimismo, el/la capacitador/a en seguridad privada para impartir enseñanza en materia de servicios de seguridad privada deberá cumplir con lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 71 del citado Decreto Supremo N° 005-2023-IN “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1213.

(...)

AGENTE DE SEGURIDAD

(...)

- Capacitación por un mínimo de 12 horas en combate contra incendio y primeros auxilios básicos. Acreditado con copia de certificado y/o constancia que puede ser emitido por institución pública o privada o la misma empresa.

Las citada entidad público y/o privado o la misma empresa, deben encontrarse enmarcadas en el marco del artículo 37 del Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada”, para capacitar en materia de servicios de seguridad privada. Asimismo, el/la capacitador/a en seguridad privada para impartir enseñanza en materia de servicios de seguridad privada deberá cumplir con lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 71 del citado Decreto Supremo N° 005-2023-IN “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1213.

(...).”

- Se **adecuará** en el literal j) del numeral 2.3 “requisitos para suscribir contrato” del Capítulo II y acápite 6 del numeral 3.1 “términos de referencia”, ambos, de las Bases integradas definitivas, lo siguiente:

“(…)

- Copia de capacitación en combate contra incendio y primeros auxilios básicos. El certificado puede ser emitido por institución pública o privada o la misma Empresa CONTRATISTA con un mínimo de 12 horas lectivas, ~~con una antigüedad no mayor de tres (03) meses, computado desde la presentación de la documentación para la suscripción del contrato.~~

(...).”

- Corresponderá al Titular de la Entidad **implementar** las directrices pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla con absolver de forma motivada, clara y precisa las peticiones formuladas por los participantes en sus consultas y/u observaciones, permitiendo que reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos.
- Se **deberá dejar sin efecto** toda disposición del pliego absolutorio, las Bases o informe técnico que se opongan a la presente disposición.

3.4 Experiencia del personal clave

De la revisión del acápite 5.1.3 “perfil del supervisor”, contenido en los requisitos de calificación de las Bases integradas, se aprecia lo siguiente:

“(…)
 - Contar con experiencia laboral de cinco (5) años como **SUPERVISOR DE SEGURIDAD**. Se acreditará con (...)
 (...)”

Por su parte, de la revisión del literal B.2 “experiencia del personal clave”, contenido en los requisitos de calificación de las Bases integradas, se aprecia lo siguiente:

“Requisitos:
 Cinco (05) años en vigilancia privada del personal clave requerido como SUPERVISOR DE SEGURIDAD.
 (...)”

Como se aprecia, la Entidad habría un incongruencia en el tipo de experiencia requerida para el supervisor; no obstante, como ambos extremos fueron materia de indagación de mercado con el cual se determinó la pluralidad de postores, se uniformizar manteniendo ambos extremos, a fin de no generar entre los potenciales postores.

En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de Bases, se implementarán las disposiciones siguientes:

- Se **adecuará** en el acápite 5.1.3 “perfil del supervisor” del numeral 3.1 “términos de referencia” de las Bases integradas definitivas, lo siguiente:

“(…)
 - Contar con experiencia laboral de cinco (5) años en vigilancia privada y/o como SUPERVISOR DE SEGURIDAD. Se acreditará con (...)
 (...)”

- Se **adecuará** en el literal B.2 “experiencia del personal clave” del numeral 3.2 “requisitos de calificación” de las Bases integradas definitivas, lo siguiente:

“Requisitos:

*Cinco (05) años en vigilancia privada y/o como SUPERVISOR DE SEGURIDAD del personal clave requerido como SUPERVISOR DE SEGURIDAD.
(...)”*

- Se **deberá dejar sin efecto** toda disposición del pliego absolutorio, las Bases o informe técnico que se opongan a la presente disposición.

4. CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

- 4.1** Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento.
- 4.2** Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección.

Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego absolutorio que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman sobre los aspectos relacionados con las Bases integradas, salvo aquellos que fueron materia del presente pronunciamiento.

- 4.3** Un vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases Definitiva por el OSCE, corresponderá al comité de selección **modificar** en el cronograma del procedimiento, las fechas de registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento.
- 4.4** Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

Jesús María, 17 de agosto de 2023

Códigos: 6.3, 14.1 y 14.2